



GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

ISSN 0123 - 9066

AÑO XXIII - Nº 193

Bogotá, D. C., jueves, 8 de mayo de 2014

EDICIÓN DE 32 PÁGINAS

DIRECTORES:

GREGORIO ELJACH PACHECO
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 198 DE 2014 SENADO

por la cual se expide la Ley General de Pesca y Acuicultura y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

Generalidades

Artículo 1°. *Objeto y finalidad.* La presente ley tiene por objeto establecer las disposiciones pertinentes a la preservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas para su uso por las generaciones presentes y futuras.

Su finalidad es contribuir a la seguridad alimentaria de los colombianos, la sostenibilidad y el desarrollo productivo del sector pesquero y acuícola, la competitividad integral de sus diferentes actores y la especial protección de la pesca artesanal.

Artículo 2°. *Definiciones.* Para los efectos de la presente ley a continuación se definen los siguientes términos:

1. Actividad pesquera y acuícola: Actividad de utilidad pública e interés social que comprende el monitoreo, investigación, repoblamiento, captura, extracción, cultivo, procesamiento, industrialización, transporte, comercialización y recreación relacionados con los recursos pesqueros y acuícolas.

2. Acuicultura: Actividad que tiene por objeto el cultivo y la producción de recursos acuícolas, marinos o continentales, en ambientes controlados, por personas naturales o jurídicas y con métodos y técnicas determinadas.

3. Aguas continentales e insulares: Conjunto de aguas que conforman los lagos, las lagunas, los embalses o ríos, dentro del territorio nacional continental e insular.

4. Aguas jurisdiccionales o patrimoniales: Conjunto de aguas donde la República de Colombia ejerce soberanía, control, administración o vigilancia, incluyendo la Zona Económica Exclusiva.

5. Aguas marinas interiores: Conjunto de aguas marinas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial y hasta donde el agua marina puede ingresar, tales como puertos, manglares, esteros, lagunas costeras, golfos, bahías, ensenadas, desembocaduras o deltas comunicados permanente e intermitentemente con el mar, siempre que sean accesibles o navegables para embarcaciones de navegación marítima.

6. Área de pesca: Espacio geográfico donde se ejercen actividades pesqueras respecto de una o varias especies hidrobiológicas que son devenidas, por lo tanto, en recursos pesqueros.

7. Área de uso múltiple: Espacio geográfico de manejo de recursos pesqueros dedicada a la protección de zonas de reproducción y/o cultivo, caladeros de pesca y repoblamiento por manejo. Las actividades pesqueras extractivas en áreas de uso múltiple estarán sujetas a la autorización de la autoridad competente, comunitaria, local, regional o nacional, la cual estará a cargo también de la vigilancia y control del área.

8. Artes, aparejos o métodos de pesca: Sistemas, equipos y técnicas de captura y extracción de recursos pesqueros.

9. Artes de pesca mayores: Artes de pesca utilizados para la captura y extracción de recursos pesqueros a escala mayor y/o industrial, con técnicas computarizadas y mecanizadas.

10. Artes de pesca menor: Artes de pesca utilizados para la captura y extracción de recursos pesqueros a pequeña escala y/o artesanal, con técnicas manuales.

11. Armador de pesca artesanal: Propietario de embarcaciones de pesca artesanal. Su número y características específicas serán definidos mediante reglamentación a la presente ley.

12. Armador de pesca industrial: Propietario de embarcaciones de pesca industrial. Su número y características específicas serán definidos mediante reglamentación a la presente ley.

13. Autoridad pesquera y acuícola: Entidad pública encargada de la administración del sector pesquero y acuícola, pudiendo para ello contar con facultades relacionadas con la actividad pesquera y acuícola y con la política nacional sectorial respectiva.

14. Capacidad de carga acuícola: Criterio utilizado para medir la cantidad máxima de biomasa representada en recursos acuícolas cultivados, que puede soportar un cuerpo de agua sin alterar negativamente la salud y calidad del ecosistema.

15. Co-manejo: Estrategia mediante la cual el Estado comparte poder y responsabilidad respecto de la información, toma de decisión y administración de uno o más recursos pesqueros y acuícolas en un área determinada, con las comunidades de trabajadores de la pesca y acuicultura debidamente agremiados y/o etnoculturalmente diferenciadas, y otros actores del sector pesquero, como entidades no gubernamentales y/o de investigación.

16. Comercialización: Fase de la actividad pesquera y acuícola que consiste en la compra y venta de productos pesqueros y acuícolas en el mercado nacional y extranjero.

17. Competitividad del sector pesquero y acuícola: Capacidad del sector pesquero y acuícola local, regional o nacional para vender y proveer bienes y servicios en un mercado determinado, respecto de la capacidad de otro sector pesquero y acuícola en el mismo mercado.

18. Competitividad global: Noción particular de la competitividad que considera la capacidad de un sector de la economía para permanecer productivo en el largo plazo bajo un esquema de desarrollo sostenible social y ambiental.

19. Comunidad etnoculturalmente diferenciada: Grupo de personas definido como tal por su identificación con una experiencia compartida o un elemento o conjunto de elementos ancestrales, transmitidos de generación en generación, con base en un territorio determinado. Para efectos de esta ley, se considerarán como comunidades etnoculturalmente diferenciadas las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

20. Cultivo: Cría y explotación de recursos acuícolas en diversas fases de desarrollo y bajo ambientes controlados.

21. Desarrollo sostenible: Esquema particular de desarrollo que implica la satisfacción de las ne-

cesidades actuales del ser humano sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Posee una dimensión ambiental basada en la promoción de los servicios que los ecosistemas proveen a los seres humanos mediante la reducción del impacto humano negativo en los ecosistemas. Posee también una dimensión social, que promueve la equidad, responsabilidad y cohesión social, como también la diversidad sociocultural, la calidad de vida de las personas y la calidad de la democracia y la gobernanza.

22. Embarcación pesquera artesanal: Embarcación utilizada por trabajadores de la pesca artesanal con una pequeña capacidad de bodega, artes menores de pesca y autonomía de navegación de corta duración. Sus características específicas serán definidas mediante reglamentación a la presente ley.

23. Embarcación pesquera industrial: Embarcación adecuada a la pesca industrial con una gran capacidad de carga, artes mayores de pesca, equipos especializados y autonomía de navegación de larga duración. Sus características específicas serán definidas mediante reglamentación a la presente ley.

24. Esfuerzo de pesca: Acción desarrollada por una pesquería sobre un recurso pesquero y por un tiempo determinados.

25. Especie demersal: Especie hidrobiológica cuyo hábitat es cercano al fondo marino.

26. Especie exótica: Especie hidrobiológica cuyo rango natural de dispersión geográfica no corresponde al territorio nacional y se ha introducido a las aguas jurisdiccionales producto de actividades humanas, sean estas deliberadas o accidentales.

27. Especie hidrobiológica: Forma de vida cuyo hábitat corriente es el medio acuático, sin importar su etapa de desarrollo. La autoridad pesquera determinará cuáles de estas especies serán consideradas recursos pesqueros y acuícolas.

28. Especie objetivo: Conjunto de recursos pesqueros sobre los cuales se orienta en forma habitual y principal el esfuerzo de pesca de una unidad de pesca determinada.

29. Especie pelágica: Especie hidrobiológica que habita en zonas alejadas de la costa.

30. Estado de plena explotación: Situación de Rendimiento Máximo Sostenible de un recurso pesquero o población en una pesquería determinada.

31. Fauna incidental: Conjunto de especies no objetivo que se capturan con un arte o método de pesca determinado durante una faena de pesca.

32. Fauna incidental aprovechada: Conjunto de especies hidrobiológicas capturadas que, a pesar de no ser consideradas como especie objetivo de pesca, se aprovechan para comercialización, consumo humano, animal o carnada.

33. Fauna incidental de descarte: Conjunto de especies hidrobiológicas capturadas que no son aprovechadas de forma alguna y que, por lo tanto, son descartadas vivas o muertas durante la faena de pesca.

34. Fauna y flora silvestre acuática: Conjunto de especies hidrobiológicas que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría regular, o que han regresado a su estado salvaje.

35. Introducción: Acción humana deliberada o accidental que tiene por objeto hacer que una o más especies hidrobiológicas habiten en el mar territorial, en las aguas continentales o en la zona económica exclusiva, sin que este hábitat constituya su área de distribución nativa.

36. Organismo genéticamente modificado: Organismo cuyo material genético ha sido modificado por acción humana mediante técnicas de ingeniería genética, con el fin de otorgarle una característica específica.

37. Organismo transgénico: Organismo genéticamente modificado específicamente mediante el ácido desoxirribonucleico recombinante (ADNr) del material genético de otra especie.

38. Permiso de acuicultura: Acto administrativo mediante el cual la autoridad acuícola, previo cumplimiento de la reglamentación expedida, autoriza a una persona natural, jurídica o a la comunidad asociada para realizar actividades de cultivo de recursos acuícolas y toda otra actividad acuícola, por un tiempo definido.

39. Permiso de pesca: Acto administrativo mediante el cual la autoridad pesquera autoriza a una persona natural, jurídica o a la comunidad asociada para realizar actividades pesqueras por un tiempo definido, condicionada al cumplimiento de las obligaciones que se establezcan en la respectiva resolución de permiso y en las zonas establecidas para desarrollar la actividad.

40. Pesca: Actividad que tiene por objeto la captura, extracción o recolección de recursos pesqueros, marinos o continentales, con artes y métodos de pesca determinados.

41. Pesca artesanal: Actividad pesquera reconocida también como Pesca a Pequeña Escala, consistente en la actividad de captura y comercialización de recursos pesqueros, en forma individual o colectiva y por persona natural o jurídica, mediante el uso de embarcaciones pesqueras artesanales y artes de pesca menores.

42. Pesca científica: Actividad pesquera realizada por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto la exploración, prospección o conocimiento científico de especies hidrobiológicas y de artes, métodos y áreas de pesca con fines: (a) investigación, repoblación o conservación de los recursos pesqueros; (b) evaluación de nuevas áreas de pesca; (c) experimentación con mecanismos de detección y artes y métodos de pesca, con el fin de determinar su eficiencia.

43. Pesca deportiva: Actividad pesquera sin ánimo de lucro que consiste en la captura de especies hidrobiológicas con fines de esparcimiento, recreación o deporte, realizada por personas o grupo de ellas, nacionales o extranjeras, en aguas marinas o continentales jurisdiccionales, utilizando artes y métodos de pesca menores desde la superficie o debajo de ella.

44. Pesca didáctica: Actividad pesquera realizada por instituciones educativas, organizaciones pesqueras o de investigación, con fines de educación ambiental, enseñanza y capacitación en pesca y acuicultura.

45. Pesca ornamental: Actividad pesquera que consiste en la captura, extracción o recolección de recursos pesqueros, marinos o continentales, con artes y métodos de pesca determinados, para su exhibición con fines decorativos y bajo condiciones controladas.

46. Pesca pelágica: Actividad pesquera ejercida mediante artes de pesca selectivos, basados en el uso de una línea madre con reinales y anzuelos debidamente encarnados, o bien mediante redes industriales, para capturar especies pelágicas y demersales.

47. Pesca industrial y semiindustrial: Actividad pesquera de mediana y gran escala, realizada por personas naturales o jurídicas, que por su naturaleza utiliza embarcaciones pesqueras industriales y artes de alta capacidad de acarreo.

48. Pesca de subsistencia: Actividad pesquera a pequeña escala sin ánimo de lucro, realizada por el trabajador de la pesca con fines de aseguramiento de sus propias condiciones básicas de vida y las de su entorno. Este tipo de pesca es libre en todo el territorio nacional y por lo tanto, no requiere de permiso.

49. Pesquería: Unidad de actividad pesquera determinada por la autoridad competente, compuesta por los elementos propios del sector, tales como los trabajadores de la pesca, los recursos pesqueros objetivo, incidental y de descarte, artes y métodos de pesca, embarcaciones y plantas de conservación y procesamiento, medios de comercialización.

50. Plan de Ordenamiento Pesquero (POP), Acuícola (POAC), o Pesquero y Acuícola (POPA): Compendio de normas y conjunto de acciones que permiten administrar una pesquería y/o una unidad de actividad acuícola determinada, a partir del conocimiento actualizado de sus aspectos biopesqueros, bioacuícolas, económicos, sociales y culturales.

51. Planta de procesamiento: Establecimiento autorizado por la autoridad pesquera y acuícola que tiene por objeto la transformación de recursos pesqueros y acuícolas de su estado natural a productos con características diferentes.

52. Población: suma de todos los organismos del mismo grupo de especies, que viven en un área determinada y tienen la capacidad de cruzarse.

53. Procesamiento: Actividad pesquera y acuícola consistente en la transformación de los recursos pesqueros y acuícolas desde su estado natural a productos de características diferentes, con el fin de adecuarlos para el consumo humano o animal, directo o indirecto. No se entenderá por procesamiento la evisceración o desentrañamiento de las especies capturadas, su conservación en hielo, el ahumado, ni la aplicación de otras técnicas de mera preservación de especies hidrobiológicas.

54. Recursos pesqueros y acuícolas: Aquella parte de las especies hidrobiológicas aprovechada para la pesca y acuicultura de manera efectiva, o que cuenta con potencial para serlo, sin que se afecte su capacidad de renovación, con fines de consumo, estudio u obtención de cualquier otro beneficio previo consentimiento de la autoridad competente, con base en la mejor información científica disponible o principio de precaución.

55. Recurso sobreexplotado: Recurso pesquero o acuícola cuyo nivel de explotación es mayor al recomendado técnicamente para su sostenibilidad en el tiempo y por lo tanto la renovabilidad de la población se encuentra comprometida.

56. Rendimiento Máximo Económico (RME): Nivel de capturas de un recurso pesquero o población a un nivel de esfuerzo de pesca dado, inferior al Rendimiento Máximo Sostenible, y que genera la mayor rentabilidad o beneficio.

57. Rendimiento Máximo Sostenible (RMS): Nivel máximo de capturas autorizadas que un recurso o población puede soportar sin peligro de verse reducido en el tiempo por un esfuerzo de pesca mayor.

58. Rendimiento Óptimo Sostenible (ROS): Nivel de capturas que tiene como referencia el Rendimiento Máximo Económico y el Rendimiento Máximo Sostenible y que conjuga los intereses de los sectores pesquero y ambiental, basado en análisis sobre el estado del recurso y sobre la situación social y económica de los trabajadores de la pesca.

59. Repoblación: Todo acto que conduzca al establecimiento, en medios ecológicos adecuados, de especies nativas extintas o en proceso de extinción dentro de su área original, permitiendo de esta manera incrementar su población, tamaño o rango natural de distribución geográfica.

60. Stock: Fracción aprovechable de una población de un recurso pesquero o acuícola que comparte un mismo grupo genético y se distribuye en un área determinada.

61. Seguridad alimentaria: Situación en la que todas las personas en un espacio geográfico determinado cuentan, a todo momento, con acceso físico y económico a alimentos adecuados, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias que permiten una vida activa y saludable.

62. Talla mínima de captura (TMC): Medida mínima aceptable para capturar una especie hidrobiológica que conforma un recurso pesquero,

en razón de sus condiciones previas de madurez y reproducción en su respectivo hábitat o medio natural.

63. Trabajador de la pesca y trabajador de la acuicultura: Persona involucrada en el sector de la pesca o la acuicultura, de forma independiente o empleada, en cualquiera de sus fases y escalas. Se excluye el personal naval y el de la administración pública en general.

65. Veda: Medida de manejo establecida por la autoridad pesquera que regula el esfuerzo de pesca mediante la prohibición de la actividad pesquera durante un tiempo y/o en un espacio geográfico determinados, a fin de proteger una fase del ciclo de vida de una especie objetivo de pesca.

66. Zona Económica Exclusiva (ZEE): Espacio geográfico de jurisdicción marítima medida desde la línea de base costera de un territorio hasta las 200 millas en el océano para los fines establecidos en la Ley 10 de 1978.

Artículo 3°. *Ámbito de aplicación.* La presente ley rige toda actividad de pesca y acuicultura que se desarrolle en aguas territoriales nacionales, continentales, insulares y marinas; tanto en el mar territorial, la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental, así como en aquellas aguas internacionales sobre las que el país tenga interés pesquero, de acuerdo con los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Colombia.

Parágrafo 1°. Se someten también a la presente ley, las actividades pesqueras de procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización de recursos pesqueros y acuícolas, sin perjuicio de los convenios internacionales ratificados por la República de Colombia.

Parágrafo 2°. Aplica a todas las personas que se dediquen a la actividad pesquera y a la actividad de la acuicultura en sus distintas fases.

Artículo 4°. *Código de Conducta para la Pesca Responsable.* El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, incentivará la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable. Los principios comprendidos en este Código deberán ser tenidos en cuenta por el Gobierno Nacional, que a través de dicho Ministerio, la Aunap y otras entidades afines, promoverán el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros.

Artículo 5°. *Principio de precaución.* La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en adelante Aunap, deberá aplicar el Principio de Precaución previsto en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a fin de asegurar el aprovechamiento sostenible, la conservación y la ordenación de los recursos pesqueros. La falta de información científica adecuada no deberá utilizarse como razón para aplazar o dejar de tomar las medidas de conservación y gestión necesarias.

Parágrafo. En cumplimiento de este artículo, y cuando se determine que una o más especies alcanzan su Rendimiento Máximo Sostenible, la Aunap suspenderá transitoriamente el ejercicio de la pesca, mediante resolución y previo informe técnico debidamente fundamentado.

Artículo 6°. *Zonas Económicas Exclusivas*. La Aunap promoverá el desarrollo de nuevas pesquerías en la Zona Económica Exclusiva. Para esto, la entidad podrá asociarse con empresas, entidades o inversionistas extranjeros.

Parágrafo. Anualmente la Aunap rendirá un informe donde especifique los avances realizados con sus asociados. El informe deberá ser socializado con las comunidades pesqueras tanto artesanales como industriales y será publicado en la página web de la Aunap.

Artículo 7°. *De la participación comunitaria*. Los sectores sociales concernidos en las actividades pesqueras y acuícolas tendrán derecho a participar en la reglamentación de la presente ley y en la toma de otras decisiones que los afecten, para lo cual, la Aunap, creará periódicamente o cuando se requiera los espacios necesarios para esa participación comunitaria.

Artículo 8°. *Dominio público*. Pertenecen al dominio público del Estado las especies hidrobiológicas contenidas en el Mar Territorial, en la Zona Económica Exclusiva y en las Aguas Continentales. En consecuencia, compete al Estado promover el desarrollo sostenible mediante la administración, investigación, fomento, control y vigilancia del ejercicio de la actividad pesquera y acuícola.

Artículo 9°. *Competencias*. El Estado, a través de las entidades competentes, se encargará del mantenimiento y la protección de los cuerpos de agua en los que se desarrolle la actividad pesquera y acuícola.

Artículo 10. *Clasificación de la pesca*. Para los fines de la presente ley, la pesca se clasifica de la siguiente manera:

1. En razón al lugar en que se realiza:
 - a) Pesca Continental, que puede ser fluvial, lacustre, estuariana, en represas y en ciénagas;
 - b) Pesca Marina, que puede ser costera, de bajura, de altura o de gran altura.
2. Por su finalidad:
 - a) Científica;
 - b) Comercial, que puede ser industrial, artesanal u ornamental; ya sea de pequeña, mediana o de gran escala;
 - c) Deportiva;
 - d) De subsistencia;
 - e) Didáctica;
 - f) Ornamental;
3. Por el tipo de artes y embarcaciones:
 - a) Artesanal;
 - b) Semiindustrial e industrial.

Parágrafo. El ámbito y alcance de cada una de las modalidades de la pesca a las que se refiere el presente artículo, se establecerán mediante el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley.

Artículo 11. *Clasificación de la acuicultura*. Para los fines de la presente ley, la acuicultura se clasifica de la siguiente manera:

1. Según el medio en que se desarrolla:
 - a) Acuicultura Marina o Maricultura: Aquella que se realiza en ambientes marinos;
 - b) Acuicultura Continental: La que se realiza en ríos, lagos, lagunas, pozos artificiales y otros cuerpos de agua no marinos;
2. Según su manejo:
 - a) Repoblación: Siembra de especies pesqueras en ambientes acuáticos naturales o artificiales sin ningún manejo posterior;
 - b) Acuicultura Extensiva: Siembra de especies pesqueras en ambientes acuáticos, naturales o artificiales con algún tipo de acondicionamiento para su mantenimiento;
 - c) Acuicultura Semiextensiva: Siembra en la que se proporciona alimentación suplementaria, además del alimento natural, con mayor nivel de manejo y acondicionamiento del medio ambiente;
 - d) Acuicultura Intensiva: Siembra en la que se proporciona alimentación suplementaria y se utiliza tecnología de última generación, lo cual permite altas densidades de cultivo.
3. Según las fases del ciclo de vida de las especies:
 - a) De ciclo completo o cultivo integral: Abarca el desarrollo de todas las fases de vida de las especies en cultivo;
 - b) De ciclo incompleto o cultivo parcial: Comprende solamente parte del ciclo de vida de la especie en cultivo.

TÍTULO II

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA

CAPÍTULO I

De la conformación, funciones y otras disposiciones

Artículo 12. *Conformación de la administración del sector pesquero y acuícola*. La administración pesquera y acuícola estará conformada por: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como entidad rectora, encargada de formular y orientar la Política Nacional Pesquera y Acuícola del país; la Aunap como entidad ejecutora de la Política y autoridad pesquera y acuícola; el Fondo de Inversión Pesquero y Acuícola como entidad financiera; y el Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura (Conpesca) como un organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional.

Artículo 13. *De la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca*. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), se constituirá como Uni-

dad Administrativa Especial del orden nacional, con personería jurídica, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, cuya sede será en Bogotá, D. C., y contará con dependencias regionales para el ejercicio de sus funciones según lo requieran las necesidades del servicio.

Artículo 14. *Objeto de la Aunap.* La Aunap tendrá por objeto ejercer la autoridad pesquera y acuícola del país, para lo cual adelantará los procesos de planificación, coordinación, ejecución y seguimiento a la política pesquera y acuícola del país y la investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos.

Artículo 15. *Funciones de la Aunap.* Todas las funciones y objeto de la Aunap contarán con criterios de sostenibilidad ambiental.

La Aunap cumplirá las siguientes funciones:

1. Ejecutar la política pesquera y acuícola que señale el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. Diseñar, implementar y administrar un sistema estadístico nacional de información pesquero y de la acuicultura como soporte de la investigación, ordenamiento, administración, fomento, inspección y vigilancia de estas actividades.

3. Actualizar permanentemente un Registro General de Pesca y Acuicultura, que incluya datos de tipo y tamaño de embarcaciones; patentes; armadores; identificación de los trabajadores y empresas artesanales e industriales de la pesca y acuicultura; autorizaciones y titulares de permisos de procesamiento, comercialización, acuicultura, pesca deportiva, ornamental y de investigación; y los demás dispuestos por la ley.

4. Velar por el cumplimiento de la totalidad de las normas jurídicas que rigen el sector.

5. Elaborar el Plan de Acción Anual para la Pesca y la Acuicultura.

6. Liderar, realizar, apoyar, coordinar, promover, validar y divulgar la investigación y generación del conocimiento en pesca y acuicultura con el objeto de brindar herramientas para el ordenamiento, administración, mejora de la productividad, la competitividad, el factor socioeconómico y cultural del sector, a través del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura y la promoción de su consumo interno, en la comunidad vinculada con la pesca y la acuicultura y en la población colombiana.

7. Establecer los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de permisos, patentes, concesiones y autorizaciones para el ejercicio de la pesca y la acuicultura.

8. Otorgar autorizaciones, permisos, patentes y concesiones para el ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura según el arte de pesca.

9. Con el apoyo del Consejo Nacional de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca y acuicultura a fin de lograr el aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades.

10. Promover ante las autoridades competentes los programas de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero y acuícola y en general de la pesca y acuicultura artesanales.

11. Propender por el desarrollo sostenible de la actividad pesquera y acuícola nacional, además de promover las actividades de fomento e investigación a la actividad pesquera artesanal, industrial y de acuicultura que garanticen su sostenibilidad y la protección de los recursos pesqueros colombianos.

12. Autorizar las importaciones y exportaciones de recursos y productos pesqueros y de la acuicultura, teniendo como objetivo mejorar las opciones de desarrollo del sector, tanto en el ámbito productivo, procesamiento y almacenaje, hasta su comercialización, transporte y consumo, de sostenibilidad económica, social y ambiental interna con relación a los recursos existentes y a sus condiciones de aprovechamiento y uso.

13. Definir con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los tipos y procedimientos a seguir para la introducción de especies pesqueras exóticas o nativas a los ecosistemas acuáticos con fines de cultivo.

14. Fijar y recaudar el monto de las tasas y derechos que deben cobrarse por concepto del ejercicio de la actividad pesquera y de la acuicultura.

15. Divulgar y promover entre los trabajadores de la pesca y la acuicultura, los instrumentos y programas en materia de salud y seguridad social establecidos por las entidades competentes.

16. Participar en la elaboración de normas que expidan otras entidades que tengan incidencia en el sector pesquero y de la acuicultura.

17. Establecer una ruta de trabajo con las autoridades competentes los mecanismos de compensación a que haya lugar, como resultado de los impactos negativos que genere el sector pesquero y acuícola, así como también los otros sectores que impacten directa o indirectamente los recursos pesqueros y de la acuicultura.

18. Fijar periódicamente el número, tamaño y tipo de embarcaciones pesqueras y sus artes con el fin de mantener la captura en los niveles máximos sostenibles en aguas jurisdiccionales.

19. Asistir al Gobierno Nacional en las negociaciones comerciales internacionales que tengan relación directa o indirectamente con la pesca y la acuicultura.

20. Publicar y divulgar la información generada por la entidad relacionada con la innovación,

investigación, desarrollo tecnológico, regulación, fomento, estadísticas e inspección y control de la actividad pesquera y de la acuicultura.

21. Diseñar, implementar y administrar el sistema de inspección y vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de la pesca y la acuicultura.

22. Establecer mecanismos y coordinar los operativos de control y vigilancia para el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de pesca y de la acuicultura en el territorio nacional, con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar), la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus respectivas competencias.

23. Adelantar las investigaciones administrativas sobre las conductas violatorias de las disposiciones establecidas en la presente ley y en general el régimen jurídico en materia de pesca y acuicultura e imponer las sanciones a que hubiera lugar, conforme con la normatividad vigente y el respeto del debido proceso.

24. Realizar alianzas estratégicas con entidades públicas, universidades, gremios y otras organizaciones privadas, nacionales e internacionales, para consolidar el fomento, la investigación, la gestión del conocimiento e información de la pesca y de la acuicultura, el ordenamiento, el desarrollo de las actividades misionales, la administración, la capacitación y la inspección y vigilancia de la pesca y de la acuicultura, así como la gestión de recursos de cooperación nacional e internacional.

25. Promover, coordinar y apoyar las investigaciones sobre los recursos y sistemas de producción pesqueros y acuícolas.

26. Contribuir con la formulación de la política pesquera y acuícola, y aportar los insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental del sector.

27. Determinar la magnitud de los recursos pesqueros, susceptibles de extracción, incluyendo sus volúmenes o unidades de captura y tallas mínimas permitidas.

28. Establecer las medidas precautorias necesarias para asegurar un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos pesqueros.

29. Promover la producción, industrialización y comercialización sostenible de los productos surgidos de la actividad pesquera y acuícola.

30. Fomentar, en coordinación con las entidades competentes, el consumo de productos pesqueros y acuícolas en todo el territorio nacional, mediante campañas informativas y publicitarias.

31. Procurar un enfoque ecosistémico en la administración de las pesquerías y unidades acuícolas teniendo en cuenta de manera integral: las poblaciones, el ambiente en que estas se desen-

vuelven y las comunidades de trabajadores de la pesca y acuicultura, tanto industriales como artesanales.

32. Estimular la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable expedido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

33. Apoyar iniciativas locales destinadas a difundir, promover e incentivar el cumplimiento de las buenas prácticas entre las comunidades de trabajadores de la pesca y acuicultura artesanales.

34. Las demás que le sean asignadas por la ley o mediante reglamentación que expida el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley.

Parágrafo. La Aunap deberá fomentar y promover la coordinación y cooperación interinstitucional tanto en el ámbito nacional, local como supranacional e internacional, con el objetivo de cumplir las funciones establecidas en el presente artículo.

Artículo 16. *Estructura general de la Aunap.* La Aunap será dirigida por una Junta Directiva y por un Director o Directora quien será su representante legal.

Parágrafo 1°. La Junta Directiva de la Aunap estará integrada por:

1. Ministro(a) de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.

2. Ministro(a) de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.

3. Director(a) Nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) o su delegado.

4. Director(a) de la Aunap.

5. Director(a) del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

6. Director(a) General Marítimo o su delegado.

7. Dos representantes de entidades académicas reconocidas en ciencias pesqueras y acuícolas.

8. Un representante de los trabajadores de la pesca industrial.

9. Cuatro representantes de los trabajadores de la pesca artesanal.

10. Dos representantes de los trabajadores de la acuicultura.

11. Un representante de los comercializadores de productos pesqueros.

12. Dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que dentro de su objeto social desarrollen programas o acciones relacionadas con temas de pesca y acuicultura.

Parágrafo 2°. El Director(a) de la Aunap actuará como secretario(a) ejecutivo(a) de la Junta Directiva.

Parágrafo 3°. Los representantes mencionados en los numerales 7 al 12 del presente artículo, serán elegidos previo consenso de las asociaciones que los agremian mediante asamblea convocada para tal fin. El periodo para el cual se nombra este representante será definido por la misma asamblea.

Artículo 17. *De las regiones pesqueras.* Para los efectos administrativos de la presente ley, se establecen regiones pesqueras en el territorio nacional, donde se instalarán oficinas administrativas regionales de la Aunap, teniendo en cuenta las particularidades geográficas, que permitan regular su operatividad y optimizar su funcionalidad de la siguiente manera.

1. Región del Pacífico con sede en Buenaventura.
2. Región del Caribe con sede en Cartagena.
3. Región Insular con sede en San Andrés Islas.
4. Región del Magdalena con sede en Barrancabermeja.
5. Región de la Orinoquía con sede en Villavieja.
6. Región de la Amazonía con sede en Leticia.

Artículo 18. *De las prohibiciones.* Para las regiones pesqueras establecidas en el artículo anterior, la Aunap, mediante resolución motivada, con base en el informe técnico respectivo y teniendo en cuenta los reportes y regulaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Dimar, las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas y los institutos de investigaciones marinas y pesqueras de orden público o privado, establecerán una o más de las siguientes prohibiciones de los recursos pesqueros y acuícolas, así como sus subproductos:

1. Veda biológica por especie en un área determinada, cuya duración se fijará en el acto administrativo de la instancia regional de la Aunap que la establezca. Las vedas se aplicarán procurando la debida concordancia con las políticas aplicadas al respecto por los países limítrofes.
2. Prohibición de captura temporal o permanente de especies protegidas por convenios internacionales de los cuales Colombia hace parte.
3. Establecimiento de un porcentaje de la cuota global de captura para fines de investigación.
4. Los demás que establezca la Ley.

Parágrafo. En el evento de fenómenos naturales o alteraciones antropogénicas que causen daño a una o más especies en un área de pesca determinada, la Aunap, por resolución motivada, podrá de manera excepcional establecer vedas extraordinarias o prohibiciones de captura, referidas a áreas específicas.

Artículo 19. *Medidas de administración.* De manera autónoma, la Aunap a través de sus direcciones regionales y mediante resolución motivada, previo informe técnico, establecerá una o más de las siguientes medidas de administración de los recursos pesqueros y acuícolas:

1. Fijación de Tallas Mínimas de Captura por especie en un área determinada y sus márgenes de tolerancia. En ningún caso la talla mínima podrá ser inferior al valor menor de la talla de primera madurez sexual de la especie respectiva.

2. Fijación de las dimensiones y características de las artes y aparejos de pesca.

Artículo 20. *Del Consejo Colombiano de Pesca y Acuicultura.* Créase el Consejo Colombiano de Pesca y Acuicultura, en adelante Conpesca, como una instancia de máximo nivel en materia de Política Pesquera y Acuícola, con el fin de actuar como organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional.

Parágrafo 1°. El Director(a) de la Aunap nombrará al Secretario Técnico de Conpesca, quien será el encargado de administrar, planificar, convocar y hacer seguimiento a las reuniones que realice este Consejo en ejercicio de sus funciones, así como de atender y canalizar las inquietudes, sugerencias, y propuestas que le presenten las asociaciones y gremios del sector.

Parágrafo 2°. Para cumplir con sus funciones como asesor en materia de política pesquera y acuícola, Conpesca estudiará previamente los asuntos pesqueros y acuícolas y debatirá en foro los temas previos a la emisión de conceptos y asesorías al Gobierno Nacional.

Artículo 21. *Conformación de Conpesca.* Conpesca estará conformado por especialistas en el sector pesquero y acuícola, en el tema que les corresponda, en representación de las siguientes entidades, agremiaciones y comunidades:

1. Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones.
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
4. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
5. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca.
6. Departamento Nacional de Planeación.
7. Dirección General Marítima.
8. Dirección Nacional de Gestión del Riesgo.
9. Entidades académicas reconocidas en investigación científica pesquera y acuícola.
10. Asociación Nacional de Industriales (ANDI).
11. Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
12. Pescadores Industriales del Caribe.
13. Pescadores Industriales del Pacífico.
14. Pescadores Industriales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
15. Trabajadores de la pesca artesanal del Caribe.
16. Trabajadores de la pesca artesanal del Pacífico.
17. Trabajadores de la pesca artesanal continental.
18. Trabajadores raizales de la pesca artesanal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
19. Comercializadores de productos pesqueros.
20. Trabajadores de la acuicultura.

21. Acuicultores industriales y comercializadores de productos acuícolas.

22. Representantes de la pesca deportiva.

23. Actores vinculados a la captura, extracción y comercialización de peces ornamentales.

24. Representantes de las comunidades negras y afrocolombianas.

25. Representantes de comunidades indígenas.

26. Representantes de género.

27. Organizaciones no gubernamentales que dentro de su objeto social desarrollen programas o acciones relacionadas con temas de pesca y acuicultura.

Parágrafo. Los representantes mencionados en los numerales 10 al 26 del presente artículo, serán elegidos previo consenso de las asociaciones que los agremia mediante asamblea convocada para tal fin. El periodo para el cual se nombra este representante será definido por la misma asamblea.

Artículo 22. *Funciones de Conpesca*. Conpesca cumplirá las siguientes funciones:

1. Asesorar al Gobierno Nacional en aspectos relacionados con el desarrollo del sector Pesquero y Acuícola.

2. Promover la participación y el intercambio de opiniones entre los sectores público y privado con miras a buscar soluciones que beneficien al sector pesquero y acuícola.

3. Fomentar el diálogo con el Gobierno Nacional con el fin de beneficiar a los diferentes actores del sector.

4. Actuar como el más alto foro nacional de discusión sobre la pesca y la acuicultura.

5. Recomendar al Gobierno Nacional las normas más adecuadas para el cumplimiento de los compromisos internacionales que Colombia adquiera en materia de pesca y la acuicultura.

6. Presentar al Gobierno Nacional las reformas necesarias en materia de legislación pesquera y acuícola con el fin de darle mayor dinamismo, eficiencia y operatividad a la institucionalidad.

7. Acompañar a la Aunap en la ejecución de la política pesquera y acuícola.

Parágrafo 1°. En cumplimiento de sus funciones, Conpesca podrá establecer diálogo con otras comisiones intersectoriales e interinstitucionales.

Parágrafo 2°. Conpesca deberá solicitar concepto a los entes territoriales vinculados al sector pesquero y acuícola, como también considerar sus Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento Pesquero y Planes de Ordenamiento Acuícola para el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente artículo.

CAPÍTULO II

De la financiación del sector pesquero y acuícola

Artículo 23. *Financiación de la Aunap*. El presupuesto de la Aunap estará conformado por:

1. Las sumas que se le apropien en el presupuesto nacional.

2. Los valores de las tasas, derechos y patentes que recaude por el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, teniendo en cuenta que un porcentaje se destinará al Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola.

3. El valor de la venta de los productos pesqueros obtenidos durante las operaciones de pesca que realice con fines de investigación, regulación o fomento.

4. El valor que recaude por concepto de los servicios técnicos que preste.

5. El producto de los empréstitos externos o internos que el Gobierno Nacional o el instituto contraten para el desarrollo pesquero y acuícola, conforme a la legislación vigente.

6. El valor por sanciones y multas que imponga y recaude, teniendo en cuenta que un porcentaje se destinará al Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola.

7. Los recursos provenientes de la cooperación técnica nacional y/o internacional.

8. Los rendimientos financieros que deriven de los recursos propios.

9. Las utilidades que obtenga de las inversiones que realice.

10. Los recursos que los municipios, distritos, departamentos y otras entidades acuerden destinar para cofinanciar programas de la Aunap.

11. Las donaciones públicas o privadas para el desarrollo de los objetivos de la Aunap.

12. Los bienes que adquiera a cualquier título.

13. Los demás a los que pueda acceder de acuerdo a la ley.

CAPÍTULO III

Del Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola

Artículo 24. *Del Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola*. Créase el Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola, como un fondo cuenta administrado por la Aunap, destinado a financiar los proyectos de inversión en pesca y acuicultura con el objeto fomentar y apoyar el desarrollo de estas actividades, así como la investigación enfocada al aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas.

Parágrafo 1°. Este Fondo brindará asistencia técnica y financiera a trabajadores de la pesca y acuicultura artesanal e industrial en épocas de veda, prohibiciones de pesca, ocurrencia de fenómenos naturales y demás circunstancias que lo requieran.

Parágrafo 2°. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, (Finagro), prestará en todo momento su apoyo técnico al Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola.

Artículo 25. *De los recursos del fondo de inversión pesquera y acuícola*. Los recursos del Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola estarán

constituidos principalmente por los aportes que se apropien del presupuesto general de la Nación al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, destinados al sector pesquero y acuícola.

También formarán parte del presupuesto de este Fondo los siguientes rubros:

1. El 50% de los recaudos por concepto de multas y sanciones provenientes de la contravención a la presente ley.

2. El 50% de los recaudos por concepto de tasas y derechos por permisos y patentes de pesca y acuicultura.

3. Los empréstitos provenientes de entidades financieras nacionales e internacionales.

4. Los bienes muebles e inmuebles aportados por la Dirección Nacional de Estupefacientes que hayan sido incautados y legalizados, que se puedan utilizar en proyectos de pesca y acuicultura.

Parágrafo. Se podrá contar además con las donaciones económicas de entidades públicas y privadas tanto nacionales como internacionales y de la cooperación internacional.

TÍTULO III

DE LA POLÍTICA PESQUERA Y ACUÍCOLA

CAPÍTULO I

Lineamientos y formulación de la política pesquera y acuícola

Artículo 26. *Naturaleza y expedición de la política pesquera y acuícola.* La Política Pesquera y Acuícola comprende el conjunto de principios, acciones, estrategias, planes y programas, que orientan la actividad del Estado y de la sociedad hacia el logro de objetivos de corto, mediano y largo plazo, referidos al aprovechamiento y producción sostenible de los recursos pesqueros y acuícolas, así como a la adecuada administración de los mismos en sus diferentes fases de extracción, cultivo, procesamiento, comercialización e investigación.

El Gobierno Nacional expedirá, mediante documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, (Conpes), la Política Pesquera y Acuícola a nivel nacional.

Artículo 27. *Derechos fundamentales a la actividad pesquera y acuícola.* Para los efectos de esta ley y de su objeto de regulación, los derechos a la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible de la actividad son los ámbitos de protección prioritariamente protegidos. En este orden, la seguridad alimentaria de las comunidades que viven de los ríos y litorales, la seguridad alimentaria de las regiones respectivas y la seguridad alimentaria de los habitantes del Estado colombiano y el desarrollo sostenible de todas las actividades que involucra, en particular las de la pesca artesanal, serán los derechos prioritariamente protegidos por parte de las autoridades públicas del sector o asociadas al mismo, en ejercicio de su intervención sobre el uso y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.

Artículo 28. *Lineamientos generales política pesquera y acuícola.* La Política Pesquera y Acuícola se orientará entre otros, por los siguientes lineamientos para su ejecución:

1. Propenderá por el equilibrio entre el aprovechamiento y producción sostenibles de los recursos pesqueros y acuícolas, con la rentabilidad económica, el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones laborales del sector, en particular en lo que hace la mejora de las condiciones de vida de las comunidades que viven de la pesca artesanal y protegerá la seguridad alimentaria de las comunidades que viven de la pesca.

2. Propenderá por el incremento del consumo a nivel nacional de productos pesqueros y acuícolas de primera calidad.

3. Estimulará medidas de diversificación con el fin de reducir el esfuerzo de pesca sobre aquellos recursos proclives a una disminución crítica de sus poblaciones.

4. Promoverá el consumo nacional de productos pesqueros y acuícolas, como parte de la riqueza con que cuenta la Nación para la seguridad alimentaria de sus habitantes, tanto por su accesibilidad, como por su valor nutritivo y riqueza gastronómica.

5. Procurará el mejoramiento y ampliación de los canales de comercialización nacional e internacional, y el aumento del valor agregado en términos de su presentación y conservación, con reconocimiento equitativo del aporte de cada actor económico que participa en el proceso para el aprovechamiento del recurso pesquero y acuícola.

6. Promoverá el desarrollo de la pesca artesanal como línea de acción entendida como esencial para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones que viven de la pesca, a través de iniciativas y empresas individuales, familiares o comunitarias.

7. Incentivará la innovación y el emprendimiento de iniciativas para el procesamiento y la comercialización de subproductos pesqueros y acuícolas, en particular para el desarrollo de la pesca artesanal y la promoción del consumo nacional.

8. Facilitará la inversión de capitales privados nacionales y extranjeros con miras a garantizar el desarrollo del sector, tanto en los ámbitos de aprovechamiento y comercialización, como en los de investigación para el mejoramiento integral de los procesos relacionados con el recurso pesquero. Dichas inversiones de manera preferente procurarán garantizar la seguridad alimentaria de la población dependiente de las actividades de pesca y acuicultura y el desarrollo económico y a la vez sostenible del sector y el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes trabajan en ella.

9. Facilitará y acompañará alianzas entre la pesca artesanal y la pesca industrial, para el mejor aprovechamiento de los recursos, la aplicación de prácticas sostenibles, la articulación con otros actores y autoridades relacionadas con el sector.

10. Establecerá mecanismos participativos con los actores económicos del sector, con las comunidades vinculadas y con los trabajadores de la pesca artesanal, en los cuales se procuren acuerdos sobre medidas de administración y manejo de los recursos pesqueros, y a su vez, se brinden las garantías para el ejercicio de la actividad a los trabajadores de la pesca y la acuicultura, en todas las etapas de ambas actividades.

11. Fomentará la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la pesca y la acuicultura, que redunden en beneficio de las comunidades y usuarios así como en la competitividad del país en el contexto nacional e internacional.

12. Tendrá la sostenibilidad económica, social y ambiental, como criterios de actuación consustancial a toda competencia de las autoridades públicas relacionadas con el sector, como a todo derecho, facultad, autorización otorgada a los particulares para el aprovechamiento y uso del recurso pesquero y acuícola.

Artículo 29. *De la formulación de la política pesquera y acuícola y la comunidad.* La formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Pesquera y Acuícola deberá contar con la participación de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la actividad, así como con el concepto de Conpesca y las demás instancias del Estado central y de las entidades territoriales con competencias relacionadas, a fin de que respondan a todas las necesidades, expectativas legítimas e intereses de productores, comercializadores, consumidores y comunidad vinculada con el sector.

Parágrafo. La Política Pesquera y Acuícola se articulará a otras políticas públicas relacionadas con el ordenamiento territorial, manejo del ambiente y los recursos naturales, políticas, programas y proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y recursos mineros, así como las que impacten directa o indirectamente las actividades pesqueras de extracción, procesamiento, almacenamiento, transporte y comercialización.

En consecuencia, en el sistema de políticas que se creen, deberán prevalecer los derechos fundamentales individuales y sociales de las comunidades vinculadas, de los trabajadores de la pesca y acuicultura artesanales y los derechos colectivos a la preservación del ambiente sano y la protección de los recursos naturales.

Artículo 30. *De los planes de ordenamiento pesquero.* La Aunap establecerá los planes de ordenamiento pesquero donde se desarrolle la actividad de la pesca y la acuicultura que se articularán y se incluirán en los planes de desarrollo local.

La Aunap actualizará los planes de ordenamiento pesquero cada cinco (5) años.

Parágrafo 1°. Los entes territoriales destinarán un porcentaje mínimo que se destinará para el desarrollo de los planes de ordenamiento pesquero. Para ello los entes territoriales solicitarán apoyo

técnico a la Aunap para acordar el porcentaje mínimo necesario para el desarrollo de los planes de ordenamiento pesquero según cada zona establecida por la Aunap.

Según los resultados de las actualizaciones de los planes de ordenamiento pesquero mencionado en el presente artículo, el porcentaje mínimo destinado por los entes territoriales destinado al desarrollo de los planes de ordenamiento pesquero se establecerá nuevamente.

Parágrafo 2°. Los planes de ordenamiento territorial o el instrumento que haga sus veces incluirá en sus determinantes ambientales, la identificación de áreas vulnerables a los efectos del cambio climático a corto, mediano y largo plazo, y la definición de estrategias de adaptación para reducir esta vulnerabilidad en las zonas establecidas para el desarrollo de los planes de ordenamiento pesquero. Asimismo, se podrán imponer restricciones a asentamientos humanos y a inversiones en zonas que sean proyectadas como vulnerables a dichos efectos en el mediano y largo plazo con el fin de proteger los recursos pesqueros.

Artículo 31. *Competencias de la formulación de la política pesquera y acuícola.* Las competencias para el diseño y ejecución de la política Pesquera y Acuícola, son responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, de acuerdo con los criterios de autonomía, descentralización y los principios de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad que rigen de manera general esta materia. Ello, sin perjuicio a que en su construcción y definición de contenidos participen las comunidades de trabajadores de la pesca y acuicultura y sus diferentes organizaciones, así como los gremios y organizaciones no gubernamentales.

Parágrafo 1°. La política deberá intervenir con racionalidad técnica y conocimiento específico en la discusión de proyectos de ley y actos legislativos en los que se relacionen temas de pesca y acuicultura. Deberá también, facilitar la conformación de redes y nodos para el intercambio de experiencias entre los departamentos, distritos y municipios, así como contribuir a su fortalecimiento técnico para formular y ejecutar las acciones locales de la Política Pesquera y Acuícola.

Parágrafo 2°. La Política Pesquera y Acuícola se apoyará, entre otros instrumentos, en los Planes de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, que comprenderán un conjunto de normas y acciones establecidas para administrar cada pesquería, fundamentado en el conocimiento actualizado de aspectos biológico-pesqueros, económicos y sociales.

TÍTULO IV

DE LA PESCA ARTESANAL E INDUSTRIAL Y OTRAS ACTIVIDADES

Artículo 32. *De la categorización de embarcaciones pesqueras.* La Aunap, en conjunto con la Dimar, deberá establecer las características que identifican a las embarcaciones dedicadas tanto a la pesca artesanal como a la pesca industrial.

Artículo 33. *De la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal, (ZEPA)*. Se establecerá la zona exclusiva de pesca artesanal, ZEPA que comprende desde Panamá hasta el Parque Nacional Natural Enseñada de Utría, pasando por todo el municipio de Bahía Solano, comprendida dentro de las ocho (8) millas náuticas contadas a partir de la más baja marea.

La Aunap establecerá mediante decreto los límites espaciales que comprenderá la ZEPA.

Parágrafo 1°. En la ZEPA se permite, además, la pesca de subsistencia y la deportiva.

Parágrafo 2°. En la ZEPA se prohíbe el ejercicio de la pesca comercial industrial y comercial explotatoria.

Parágrafo 3°. En la ZEPA se prohíbe la utilización de artes de pesca de enmalle y chinchorros.

CAPÍTULO I

De la pesca artesanal

Artículo 34. *De la actividad pesquera artesanal*. La actividad pesquera artesanal estará orientada al consumo humano directo bajo criterios de seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental y podrán ejercerla todos los colombianos o extranjeros, de manera individual, familiar o asociativa.

Parágrafo. La Aunap mediante reglamento de la presente ley establecerá las zonas reservadas para la pesca artesanal fuera de lo establecido en el artículo 33, previo consenso con Conpesca, y dictará las normas pertinentes para el ejercicio de la pesca ornamental, tanto marina como continental.

Artículo 34. *Registro General de Pesca y Acuicultura*. Para tener acceso al aprovechamiento de los recursos pesqueros y a los beneficios, garantías, ventajas y medidas de protección específicas, los trabajadores de la pesca artesanal, así como sus embarcaciones, deberán previamente inscribirse en el Registro General de Pesca y Acuicultura. La Aunap expedirá la respectiva cédula que acredite su calidad como trabajador de la pesca y acuicultura artesanales.

Parágrafo 1°. La cédula no podrá enajenarse, arrendarse ni gravarse con ningún derecho en beneficio de terceros, a ningún título, que implique su transmisibilidad.

Parágrafo 2°. Los trabajadores de la pesca que forman parte de tripulaciones de embarcaciones de pesca industrial, deberán estar inscritos en el Registro General de Pesca y Acuicultura.

Artículo 35. *De las capacitaciones*. La Aunap junto con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y el Sena propiciarán e implementarán programas semestralmente de educación pertinentes a la pesca, la acuicultura su desarrollo y el manejo sostenible a los pescadores artesanales registrados de manera gratuita quienes una vez capacitados podrán ejercer como veedores ambientales en su territorio de pesca y acuicultura ante cualquier circunstancia que amenace la sostenibilidad ambiental de los recursos pesqueros.

Los pescadores artesanales registrados podrán ser parte de los equipos de investigación de la Aunap.

Artículo 36. *De las capturas*. En las regiones pesqueras del Pacífico, Caribe e Insular, la Aunap establecerá un porcentaje de la cuota global de captura destinado a la pesca artesanal, de acuerdo con la pesquería, el área de pesca, tamaño de las embarcaciones, asentamientos y número de trabajadores de la pesca, así como la identificación individual y el grado de organización comunitaria.

La Aunap, a través de la emisión de un informe de carácter público derivado de las investigaciones, establecerá el porcentaje de la cuota global de captura anualmente según criterios de sostenibilidad ambiental.

Parágrafo. La Aunap ejercerá control a las capturas provenientes de la pesca artesanal, para lo cual se promoverá la aplicación del concepto de co-manejo entre la administración pesquera y las comunidades de trabajadores de la pesca artesanal.

Artículo 37. *De la participación de los trabajadores de la pesca artesanal y sus asociaciones y organizaciones aliadas, en la definición de políticas de inversión y de fomento*. La Aunap solicitará anualmente a los trabajadores de la pesca artesanal, y a sus asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales que hayan desarrollado proyectos para la pesca artesanal, las propuestas que estimen convenientes para la elaboración del programa anual de inversión en infraestructura para la pesca artesanal.

Igualmente, atenderá las sugerencias e información respecto de necesidades de capacitación, asistencia técnica, repoblación, cultivo, procesamiento y comercialización de productos pesqueros, a los organismos pertinentes. Una vez completado dicho proceso, la Aunap aprobará el programa anual y el establecimiento de las prioridades anuales correspondientes.

CAPÍTULO II

De la pesca industrial

Artículo 38. *Régimen general de acceso*. En el mar territorial, con excepción de las áreas reservadas para la pesca artesanal, en la zona contigua y en la Zona Económica Exclusiva de Colombia, existirá un régimen general de acceso a la actividad pesquera extractiva industrial, en aquellas pesquerías que se soliciten a la Aunap.

Artículo 39. *De las embarcaciones de bandera colombiana y extranjeras*. La actividad pesquera industrial podrá ser realizada por embarcaciones de bandera colombiana, de acuerdo con las disposiciones de la Dimar; o de bandera extranjera afiliadas a empresa colombiana, las cuales deben destinar parte de su producción al mercado interno del país, descargando este producto de las capturas en puerto colombiano, en la proporción que la Aunap señale.

La Aunap establecerá el porcentaje de la producción destinada al mercado interno del país de la actividad pesquera para las embarcaciones de bandera colombiana y extranjeras.

Artículo 40. *De la flota pesquera.* La Aunap establecerá la conformación de una flota pesquera de bandera colombiana, facultada para:

1. Limitar la pesca de aquellas especies que determine.
2. Establecer tarifas diferenciales para las tasas y derechos, de manera que se favorezca a las embarcaciones de bandera colombiana.
3. Promover el establecimiento de estímulos para la construcción naval y para la nacionalización de embarcaciones extranjeras.

Artículo 41. *Permisos.* Las personas naturales o jurídicas interesadas en desarrollar pesca industrial, deberán solicitar el respectivo permiso de pesca a la Aunap, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por esta entidad y la misma se otorgará o negará mediante resolución motivada, previo informe técnico.

El permiso de pesca industrial habilitará a la persona natural o jurídica para realizar actividades pesqueras extractivas, sobre las especies y áreas que en ella se indiquen, por un tiempo definido, conforme al cumplimiento de la normativa vigente.

El permiso de pesca industrial no podrá enajenarse, arrendarse ni gravarse con ningún derecho en beneficio de terceros, a ningún título, que implique su transmisibilidad.

Artículo 42. *De las especies migratorias.* La pesca de especies altamente migratorias podrá ser realizada por embarcaciones de bandera nacional o extranjera. Las embarcaciones que ejerzan la actividad extractiva industrial más allá de la Zona Económica Exclusiva, deberán respetar las normas emanadas de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera.

Parágrafo 1°. La Aunap establecerá un régimen especial de pesca para especies migratorias y altamente migratorias, limitará las capturas de acuerdo con las observaciones, recomendaciones de los institutos de investigación y la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura en donde se establecerán los tiempos de pesca, prohibiciones de especies en peligro de extinción, altamente reducidas y las demás recomendadas por las instituciones de investigación y organizaciones internacionales.

Parágrafo 2°. La Aunap se encargará de recopilar datos, promover una evaluación de poblaciones basada en la cooperación y elaborar y aplicar medidas de ordenación de alcance internacional de las especies migratorias y altamente migratorias.

Artículo 43. *Del recurso atunero.* La Aunap estimulará la exportación del recurso atunero y para tal fin podrá autorizar el trasbordo en puerto de los productos capturados que se destinarán al mercado externo, bajo fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian). De la misma forma deberá fijar el porcentaje de la captura que deberá desembarcarse en territorio nacional para consumo interno que deberá ser de primera calidad.

Artículo 44. *Recurso en estado de plena explotación.* Cuando un recurso pesquero sea declarado en Estado de Plena Explotación, la Aunap suspenderá por resolución la recepción de solicitudes y el otorgamiento de permisos para extraer dicho recurso en el área que se determine, incluida su fauna acompañante, y por el tiempo que se estime prudente según las evaluaciones y recomendaciones técnicas.

Parágrafo. A partir de la declaración del Estado de Plena Explotación, la Aunap expedirá semestralmente una resolución que contenga el listado de empresas y embarcaciones que cumplan los requisitos para realizar las actividades de extracción y captura en la respectiva unidad de pesquería.

En todo caso, cuando resulte indispensable, los permisos respectivos podrán suspenderse temporalmente, cuando se evidencien afectaciones a la preservación y sostenibilidad de los recursos pesqueros en cuestión.

CAPÍTULO III

De la pesca deportiva

Artículo 45. *De la reglamentación.* La Aunap, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reglamentarán la actividad de la pesca deportiva.

Artículo 46. *Permisos y autorizaciones.* La Aunap otorgará el permiso de pesca deportiva a solicitud del interesado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos para el caso.

La Aunap mediante acto administrativo autorizará los concursos, áreas, especies, embarcaciones, épocas, artes, cantidades y demás aspectos relacionados con la actividad de pesca deportiva.

Parágrafo. Mediante reglamentación de la presente ley, la Aunap definirá las especies pesqueras que pueden ser objeto de la pesca deportiva, así como aquellas prohibidas para este tipo de pesca.

Artículo 47. *Registro.* Los clubes de pesca y asociaciones similares, deberán registrarse anualmente, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la Aunap quienes contribuirán con una cuota mínima anual que establecerá la Aunap.

Los recaudos por las contribuciones a la cuota anual se destinarán al sostenimiento y mantenimiento de la pesca deportiva como actividad turística y deportiva.

Artículo 48. *Del turismo.* Se establecerá la pesca deportiva como actividad turística y deportiva en las zonas aptas para dicha actividad, con las restricciones, especificaciones de manejo vigilancia y control que disponga la Aunap con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Turismo.

TÍTULO V

DE LA ACUICULTURA

CAPÍTULO I

De los permisos

Artículo 49. *De los permisos.* El permiso de acuicultura tiene por objeto la realización de acti-

vidades de cultivo en un área determinada y por un tiempo definido, respecto de la especie o grupo de especies pesqueras que se indiquen; permite a sus titulares el desarrollo de sus actividades, sin más limitaciones que las expresamente establecidas en esta ley y sus reglamentos o derivadas de los deberes y límites propios al ejercicio de las libertades y derechos económicos de quienes desarrollan tal actividad.

La Aunap otorgará permisos para el ejercicio de la acuicultura. El solicitante del permiso deberá cumplir los requisitos necesarios ante las demás entidades competentes, con el fin de obtener los derechos de uso de terrenos, aguas, costas, playas, lechos de ríos o fondos marinos en los que desarrollará la actividad.

Artículo 50. *De la disposición y negación de los permisos.* El permiso de acuicultura se otorgará o negará mediante resolución motivada, previo informe técnico y no podrá enajenarse, arrendarse ni gravarse con ningún derecho en beneficio de terceros a ningún título, que implique su transmisibilidad.

Parágrafo 1°. Toda persona natural, jurídica o comunidad asociada, podrá solicitar ante la Aunap, el permiso para desarrollar en un área apta para la acuicultura, proyectos de cultivo de recursos pesqueros los cuales deberán ser soportados por estudios técnicos. El contenido de los estudios técnicos y los demás requisitos para el permiso serán señalados en el reglamento expedido por el Gobierno Nacional con el apoyo de la Aunap para dicho fin.

Parágrafo 2°. El titular de un permiso de acuicultura deberá iniciar sus operaciones dentro del plazo de un año contado desde la entrega material de la misma, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito.

Artículo 51. *De los permisionarios.* Los permisionarios de acuicultura podrán realizar todas aquellas obras materiales, muelles, atracaderos, inversiones e instalaciones previa autorización del órgano competente, cuando proceda.

El mantenimiento de la limpieza y del equilibrio ecológico en el área del proyecto, cuya alteración tenga como causa la actividad acuícola será responsabilidad del titular del permiso de acuicultura y en caso de perjuicio será evaluado por las autoridades competentes y según el daño se someterá a las sanciones ambientales que establece la ley.

Artículo 52. *Pagos por permisos.* Los titulares de permisos de acuicultura pagarán anualmente una tasa determinada por la Aunap.

Parágrafo. El recaudo referido en este artículo, se incorporará al Fondo de Inversión Pesquera y Acuícola, para proyectos en piscicultura rural y en zonas de comunidades de trabajadores de la pesca artesanal que muestren interés en proyectos productivos acuícolas.

Artículo 53. *De las áreas para la acuicultura.* La Aunap elaborará los estudios técnicos que de-

terminen las áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura. Para tal fin, deberá tener en cuenta el concepto de Capacidad de Carga Acuícola así como consultar a los organismos encargados de los usos alternativos de dichas áreas, considerando especialmente la existencia de recursos hidrobiológicos, sus características productivas y la protección del medio ambiente.

La Aunap determinará las estaciones acuícolas continentales y marinas sobre las cuales ejercerá autoridad y definirá su funcionamiento con el fin de lograr la eficiencia y continuidad requeridas.

Será limitada la escogencia de zonas en terrenos y cuerpos de agua aptas para la acuicultura, en los siguientes casos:

1. Aquellos en los que exista la presencia de actividades pesqueras extractivas artesanales.
2. Los esteros.
3. Los canales de acceso y salida de puertos.
4. Los asentamientos de trabajadores de la pesca y acuicultura.
5. Las áreas de fondeo de la fuerza naval y las zonas donde se ejecuten ejercicios navales y militares.
6. Las áreas de desarrollo portuario.
7. Las zonas de interés turístico.
8. Las áreas protegidas que constituyen Parque Nacionales Naturales, Regionales y locales, Reservas, Santuarios de Flora y Fauna, Monumentos Nacionales, entre otras.

Parágrafo 1°. Las resoluciones que se expidan de conformidad con lo dispuesto en este artículo, deberán delimitar claramente las áreas geográficas que se fijen como apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, especificándose el perímetro de ellas.

CAPÍTULO II

Del cultivo de especies nativas, foráneas y repoblación

Artículo 54. *Del cultivo de especies nativas y foráneas.* Previa autorización de la Aunap y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se podrán cultivar las especies pesqueras nativas o aquellas foráneas cuya introducción haya sido admitida por la autoridad ambiental con los criterios de sostenibilidad y siempre y cuando no representen una amenaza para los ecosistemas nacionales.

Artículo 55. *Proyectos de repoblación.* La Aunap promoverá y facilitará las iniciativas públicas y privadas cuyo propósito sea desarrollar proyectos de repoblación, a fin de garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas.

Artículo 56. *De la promoción especial de la acuicultura en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.* La Aunap promoverá el ejercicio de la acuicultura en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la cual se permitirá en aquellas aéreas aptas para la misma, previo concepto técnico emitido por la autoridad ambiental del departamento.

**TÍTULO VI
DEL PROCESAMIENTO
Y LA COMERCIALIZACIÓN**

Artículo 57. *Autorización del procesamiento y comercialización.* El procesamiento y comercialización de productos y subproductos pesqueros y acuícolas será autorizado a toda persona natural, jurídica o comunidad asociada mediante permiso de la Aunap, de acuerdo con las normas nacionales y de comercio exterior.

Artículo 58. *Del procesamiento.* El procesamiento de los productos pesqueros y acuícolas deberá hacerse en plantas fijas instaladas en tierra, salvo en casos excepcionales cuando no se cuente con la capacidad de proceso suficiente en territorio colombiano.

La Aunap podrá autorizar, en coordinación con la Dimar el uso de plantas procesadoras flotantes, siempre y cuando estas operen permanentemente unidas a tierra. Esta modalidad será regulada mediante reglamento de la presente ley.

Parágrafo. La Aunap estimulará, en conjunto con la empresa privada, la instalación y adecuación de plantas procesadoras en las áreas de influencia de los centros de acopio y sitios de desembarco en el territorio nacional.

Artículo 59. *De los productos y normas de calidad.* Las personas naturales y jurídicas que adelanten actividades de procesamiento, se sujetarán a las normas de sanidad, calidad e inspección sobre la materia. Los productos no aptos para consumo humano serán retirados del mercado por el organismo competente, se destinarán a otros usos diferentes al consumo humano o se desecharán definitivamente.

Artículo 60. *Infraestructura de procesamiento y comercialización.* Las entidades del sector público, dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción, promoverán el crecimiento de la infraestructura de procesamiento y comercialización de productos pesqueros y acuícolas siempre y cuando cuente con criterios de sostenibilidad ambiental. La Aunap establecerá las condiciones específicas y los requisitos que deberán cumplir las empresas que procesan o comercializan productos pesqueros.

Artículo 61. *Eficiencia en la comercialización.* La Aunap, en coordinación con las demás entidades competentes, adoptará las medidas necesarias para poner en funcionamiento un sistema ágil y eficiente de comercialización en concordancia con las normas que para tal efecto señale la autoridad competente.

**TÍTULO VII
DE LA INVESTIGACIÓN
Y LA INFORMACIÓN**

CAPÍTULO I

De la investigación

Artículo 62. *Desarrollo de la investigación.* Es obligación del Estado y deber de la sociedad co-

lombiana, desarrollar procesos de Investigación sobre los recursos pesqueros y acuícolas en todo el territorio nacional, con el propósito de establecer medidas apropiadas de administración y control para su sostenibilidad y aprovechamiento.

Parágrafo. La investigación pesquera y acuicultura se refiere a todos los estudios, trabajos y experimentos que se realicen con el objeto de mejorar el conocimiento de los recursos pesqueros y acuícolas para fines de extracción, mejoramiento en los procesamientos, comercialización, cultivo, sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas y otros beneficios.

Artículo 63. *Para los efectos de la presente ley,* la investigación de pesca comprende la pesca exploratoria o de prospección, cuyo producto podrá ser comercializado previo análisis y autorización de la Aunap y la pesca científica no tendrá fines comerciales.

Parágrafo. La Aunap se encargará de recopilar datos, promover una evaluación de poblaciones basada en la cooperación y elaborar y aplicar medidas de ordenación de alcance internacional de los recursos pesqueros que sean objeto de pesca científica sin fines comerciales con el fin de proteger los recursos pesqueros que se encuentran bajo la protección de tratados internacional, nacionales o sean especies en peligro.

Artículo 64. *Funciones con relación a la investigación.* La Aunap con relación a la investigación pesquera y de acuicultura tendrá las siguientes funciones:

1. Establecer el programa anual de investigación y sus prioridades.
2. Asignar mediante concurso público a ser reglamentado por el Gobierno, los proyectos de investigación y los fondos para su ejecución.
3. Preparar y divulgar la memoria anual de actividades.
4. Contratar con expertos o institutos especializados nacionales o internacionales, las investigaciones que requieran el desarrollo del sector.

Artículo 65. *Autorización de la investigación.* La Aunap autorizará la pesca de investigación de conformidad con las normas vigentes y las establecidas mediante reglamentación de la presente ley.

Artículo 66. *De los institutos de investigación y otras instituciones.* Los Institutos de Investigación o de educación reconocidos por el Estado así como museos, acuarios y zoológicos, entre otros, podrán obtener de la Aunap una autorización especial para mantener en cautiverio, transportar ejemplares vivos de especies pesqueras, así como poseer y transportar ejemplares muertos, partes de estos o sus derivados, para los fines de la investigación o pedagogía pertinente.

Artículo 67. *Del presupuesto.* El presupuesto de la Aunap deberá apropiar anualmente partidas de un mínimo porcentaje para financiar la inves-

tigación pesquera y de acuicultura que posibilite el cumplimiento de los objetivos plasmados en el artículo 65.

Artículo 68. *De las embarcaciones y permisos de investigación.* Cuando la Aunap expida permisos para investigación en pesca marina con embarcaciones, el titular de dicho permiso deberá admitir a bordo a los profesionales que señale la Aunap, así como entregar los resultados y conclusiones de la investigación dentro de los plazos del proyecto.

Artículo 69. *De las contrapartes.* La Aunap actuará como contraparte nacional en todos aquellos proyectos de investigación, preinversión o estudios relacionados con la actividad pesquera y acuícola que fueren financiados o ejecutados por organismos extranjeros o entidades internacionales, previamente autorizados por el Gobierno Nacional.

Artículo 70. *De las embarcaciones extranjeras.* Sin perjuicio de lo establecido en esta ley, se podrá autorizar la operación de embarcaciones extranjeras en aguas jurisdiccionales con fines de pesca de investigación, las cuales deberán cumplir los requisitos establecidos por la Dirección General Marítima – Dimar, y otras entidades competentes.

Parágrafo 1°. La Aunap registrará los fines, la pesca realizada en cantidad y número, discriminado por especie, los tripulantes de embarcaciones extranjeras que ingresen en aguas jurisdiccionales con fines de pesca de investigación. Se realizará igualmente un seguimiento de periodicidad a cada embarcación que ingrese en aguas jurisdiccionales con fines de pesca de investigación y se establecerá un periodo máximo de ingresos.

Parágrafo 2°. Se tendrá especial atención con especies en vía de extinción o en peligro y los crustáceos de los cuales se limitará el número de especies captadas anuales por embarcaciones nacionales y extranjeras con base en las recomendaciones de las organizaciones internacionales.

Parágrafo 3°. Con el objeto de asegurar el adecuado monitoreo y control de la actividad pesquera, las embarcaciones de bandera nacional o extranjera, que desarrollen actividades extractivas o de investigación en aguas de jurisdicción nacional, deberán tener a bordo y mantener en funcionamiento un dispositivo de seguimiento satelital, desde el zarpe hasta el arribo al puerto autorizado. La misma obligación deberán cumplir las embarcaciones de bandera nacional que operen en aguas no jurisdiccionales.

La información obtenida mediante el sistema de seguimiento satelital tendrá el carácter reservado. Su destrucción, sustracción o divulgación será sancionada con las penas señaladas en el Código Penal, según corresponda.

Artículo 71. *De los convenios y alianzas.* La Aunap establecerá convenios de cooperación y alianzas estratégicas con entidades como el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, (Colciencias), las adscritas al Sistema Nacional Ambiental – Sina, universidades, centros

de investigación y organizaciones no gubernamentales, para la realización de proyectos de investigación en pesca y acuicultura.

Artículo 72. *De la socialización.* El resultado de las investigaciones que se adelanten será público y estará disponible para los usuarios y ciudadanos en general a través del Sistema Nacional de Información Pesquera y acuícola, (Sinpa).

De igual manera los resultados de las investigaciones se socializarán en las poblaciones pesqueras artesanales e industriales a través de los concejos comunitarios y todo espacio de participación ciudadana donde se encuentren la población en mención.

CAPÍTULO II

Sistema Nacional de Información Pesquera y Acuícola

Artículo 73. *Del sistema de información pesquero y acuícola.* Créase el Sistema Nacional de Información Pesquero y Acuícola, (Sinpa), el cual unificará todos los datos de investigaciones, registros, y demás datos e información existente referente a la actividad pesquera y acuícola.

Artículo 74. *Del contenido.* El sistema de información pesquero y acuícola contendrá información de precios y mercados para la producción acuícola y pesquera de Colombia, así como el monitoreo de los volúmenes de pesca y estadísticas biológicas y demás que indique la Aunap.

Asimismo, el registro de embarcaciones nacionales y extranjeras con permiso, autorización, título o patente para la extracción del recurso pesquero en cualquiera de sus formas y arte.

TÍTULO IX

LOS DERECHOS Y LAS TASAS

Artículo 75. *Del derecho a ejercer la actividad pesquera y acuícola.* El Derecho a ejercer la actividad pesquera y acuícola se puede obtener así:

1. Por ministerio de la ley: Cuando se trate de pesca de subsistencia, la cual es libre en todo el territorio nacional.

2. Permiso: En los casos de investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de productos pesqueros y acuícolas.

3. Patente: Cuando se utilizan embarcaciones para el ejercicio de la pesca.

4. Autorización: Cuando se trate de importación o exportación de recursos y/o productos pesqueros y acuícolas.

5. Asociación: Cuando la Aunap se asocie, mediante la celebración de contratos comerciales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para realizar operaciones conjuntas propias de la actividad pesquera y acuícola con criterios de sostenibilidad ambiental.

Artículo 76. *Término del permiso y autorizaciones.* Son causales de caducidad del permiso, autorización o patente los siguientes hechos, según corresponda:

1. La transferencia del permiso, autorización o patente a terceros.

2. El amparo de actividades de terceros con el permiso.

3. La realización de actividades diferentes a las autorizadas en el respectivo permiso.

4. El uso de arte y aparejos no autorizados.

5. La realización de actividades fuera del área autorizada, o con especies o productos no contemplados en el permiso.

6. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el permiso, autorización o patente.

7. La no utilización del permiso durante el término de un (1) año, salvo caso de fuerza mayor debidamente comprobado.

8. Las demás que contenga el acto administrativo que otorga el permiso.

Parágrafo. Los permisos y autorizaciones para la pesca industrial tendrán una vigencia de dos (2) años. La Aunap establecerá una cuota mínima de renovación que se destinará según lo establecido en el artículo 23 de la presente ley.

Artículo 77. *Información del titular.* El titular de un permiso, autorización o patente deberá informar por escrito a la Aunap, sobre cualquier modificación que ocurriere respecto de la información inicialmente registrada.

Para ello, la Aunap dispondrá de una plataforma virtual para facilitar los cambios y modificaciones de la información. Así mismo la Aunap dispondrá de medios por escrito y verbales en las oficinas regionales que faciliten las modificaciones de la información.

Parágrafo. No se podrá autorizar ni renovar permisos hasta tanto la información no esté actualizada.

Artículo 78. *Pago de tasas y derechos.* El ejercicio de la actividad pesquera y acuícola estará sujeto al pago de tasas y derechos, para lo cual la Aunap deberá considerar:

1. La clase de pesca, en concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley.

2. El tipo de arte o aparejo de pesca.

3. La bandera de la embarcación.

4. El tipo de embarcación en consideración a su tonelaje de registro neto (TRN) y potencia del motor (HP).

5. El tipo de pesquería, teniendo en cuenta la especie o especies de que se trate.

6. El destino de los productos, considerando que puede ser para el consumo interno o exportación.

7. Si la pesca se desarrolla en aguas marinas o continentales, cuando se trata de la pesca deportiva.

8. Capacidad de transformación de productos pesqueros en toneladas por año, cuando se trate de un permiso de procesamiento.

9. Capacidad de comercialización de productos pesqueros en toneladas por año.

10. Eslabón en la cadena de comercialización en el caso de los peces ornamentales.

11. Área de espejo de agua y/o volúmenes de producción anual, en el caso de la acuicultura.

Parágrafo. A las embarcaciones de bandera colombiana se les aplicará tasas preferenciales.

Artículo 79. *Reglamentación de las tasas.* El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberá reglamentar las cuantías por concepto de tasas y derechos de conformidad con la política establecida al respecto.

Parágrafo. El monto de las tasas y derechos así como las multas y sanciones por infracción a la presente ley, se establecerán tomando como referencia el salario mínimo legal diario, equivalente a la treintava parte del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha del pago.

Artículo 80. *Beneficios.* Las embarcaciones industriales que acrediten el pago de la seguridad social de sus tripulantes colombianos, así como procedimientos para asegurar el aprovechamiento sostenible del recurso pesquero y acuícola y el cumplimiento de obligaciones y prohibiciones propios de la actividad, tendrán un descuento en el valor de la patente y permiso de pesca establecidos mediante reglamento de la presente ley.

TÍTULO X

DE LAS PROHIBICIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 81. *Prohibiciones.* Se prohíben las siguientes conductas:

1. Realizar actividades pesqueras o acuícolas sin permiso, patente ni autorización o contraviniendo las disposiciones que las regulan.

2. Capturar recursos pesqueros en período de veda.

3. Efectuar faenas de pesca sobre especies en contravención a lo establecido en los respectivos permisos o autorizaciones.

4. Pescar con métodos ilícitos tales como material tóxico, explosivos y otros cuya naturaleza pueda causar peligro para los recursos pesqueros o la vida humana.

5. Utilizar las embarcaciones pesqueras para fines no permitidos excepto en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

6. Vender o transbordar a embarcaciones no autorizadas parte o la totalidad de la pesca. La venta del producto de la pesca se hará en puerto colombiano.

7. Transferir, bajo cualquier circunstancia, los derechos derivados del permiso, autorización o patente otorgados por la Aunap.

8. Suministrar a la Aunap información incorrecta o incompleta o negarle acceso a los documentos que esta exija.

9. Realizar faenas de pesca en alta mar con embarcaciones que enarboles el pabellón colombiano, infringiendo las normas de los tratados o con-

venios internacionales ratificados por Colombia y vigentes, que tengan por objeto la protección, conservación o uso racional de las especies pesqueras.

10. Operar una embarcación sin mantener en funcionamiento el sistema de seguimiento satelital en el mar.

11. Capturar recursos pesqueros con artes o aparejos de pesca prohibidos, ya sea en relación a las áreas de pesca o a la selectividad de los mismos.

12. Capturar, transportar, comercializar y/o almacenar productos pesqueros que no cumplen la talla mínima establecida.

13. Introducir al país o trasladar de una cuenca hidrográfica a otra dentro del país, recursos pesqueros sin la previa autorización de la Aunap y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

14. Las demás conductas que señale el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley.

Parágrafo. Con respecto al numeral 13 de este artículo, se considerará más grave la conducta, si los recursos pesqueros o acuícolas son organismos genéticamente modificados o transgénicos.

Artículo 82. *De las infracciones.* Se tipifica como infracción toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en la presente ley, así como en todas las demás disposiciones legales y reglamentarias.

Artículo 83. *Sanciones administrativas.* La Aunap tendrá facultades sancionatorias y coactivas con arreglo a lo establecido en la ley y la Constitución, por lo tanto las infracciones reguladas en la presente ley, serán sancionadas según su gravedad, sin perjuicio de las sanciones penales y demás a que hubiere lugar.

La Armada Nacional, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Dimar, la Fiscalía y el DAS, prestarán apoyo a la Aunap en el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, de acuerdo con la competencia y jurisdicción de cada una de estas instituciones.

Parágrafo. Toda persona podrá presentar denuncia por infracción a la normativa pesquera y acuícola ante la Aunap.

Artículo 84. *Infracciones de la ley.* Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente ley y demás normas legales y reglamentarias, se harán acreedores, según la gravedad de la infracción, a una o más de las siguientes sanciones que aplicará la Aunap:

1. Conminación por escrito.
2. Multa.
3. Suspensión temporal del permiso, autorización, o patente, según sea el caso.
4. Revocatoria del permiso, autorización, o patente.
5. Decomiso de embarcaciones, equipos o productos pesqueros.

6. Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento.

7. Las demás sanciones que señale el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley.

Parágrafo. Toda sanción por infracciones de la ley enumerada en este artículo y demás que señale el reglamento expedido por el Gobierno Nacional estará acompañada de un servicio social y ambiental. La Aunap y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible definirán las actividades en las que los infractores puedan participar como parte de su sanción.

Artículo 85. *Del responsable de las infracciones.* De las infracciones será responsable el autor material de ellas. Tratándose de infracciones en pesca marina, responderá el capitán o patrón y el dueño de la embarcación pesquera artesanal o industrial, de manera solidaria con el armador y el titular del permiso.

Parágrafo 1°. Las infracciones en pesca marina serán investigadas y sancionadas por la Aunap, teniendo en cuenta las diligencias preliminares que adelante la Dimar por intermedio de la Capitanía de Puerto correspondiente. Esta última, a petición de la Aunap, no permitirá el zarpe de la embarcación investigada, hasta tanto no se diere cumplimiento a las sanciones impuestas por la Aunap, sin perjuicio de las demás sanciones aplicables.

Parágrafo 2°. El conocimiento de los procesos en primera instancia por infracciones de la presente ley corresponderá a los Directores Regionales de la Aunap correspondientes a la jurisdicción donde ellas se hubieren cometido o donde hubiesen tenido principio de ejecución. La segunda instancia estará a cargo del Director o Directora de la Aunap.

Artículo 86. *Decomiso.* Cuando el decomiso de productos pesqueros se practique por iniciativa de la Armada Nacional, la Aunap podrá hacer entrega de una parte de dicho producto a esta entidad cuando la misma así lo solicite.

Parágrafo 1°. Los productos pesqueros, en su estado natural o procesados, objeto de la infracción, como también las artes y aparejos de pesca y medios de transporte utilizados, deberán ser incautados y puestos a disposición de la Aunap a la mayor brevedad.

Parágrafo 2°. La Aunap, podrá ordenar el bodegaje e inmediata subasta pública del producto pesquero incautado. El precio final subastado, luego de descontarse el valor de los costos incurridos en transporte, bodegaje, logística, deberá depositarse en la cuenta corriente de la Aunap, como garantía del pago de las multas que pudieren ser aplicadas.

Si la persona sancionada, logra constituir una garantía equivalente al valor del producto pesquero incautado o al monto de las multas que se apliquen, la Aunap podrá ordenar su inmediata devolución, previo análisis de viabilidad.

Parágrafo 3°. El producto pesquero decomisado, podrá ser donado a establecimientos de beneficencia o similares, de acuerdo con la naturaleza y estado en que se encuentre.

CAPÍTULO XI

Disposiciones finales

Artículo 87. *Reglamentación.* Se entregan facultades al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por un término de doce meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir las normas reglamentarias concernientes a los ajustes de carácter administrativo y financiero necesarios para la puesta en marcha y ejecución de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

Artículo 88. *Vigencia.* La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las leyes que le sean contrarias, en especial, las contenidas en la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. INTRODUCCIÓN

El sector de la pesca y acuicultura ha sido largamente olvidado en Colombia. A pesar de tener grandes extensiones de aguas marinas y continentales, sumado a una diversidad considerable de especies; a pesar de tener una ley, reglamentación y decretos que regulan el sector; a pesar de los avances en torno a la nueva institucionalidad del sector; a pesar de constituir la actividad principal de cientos de miles de colombianos y colombianas; a pesar del potencial económico que tiene, el país no ha logrado terminar de valorizar el valor económico y sociocultural de la pesca y la acuicultura. Este proyecto de ley busca superar ciertas debilidades de la normativa anterior, proponiendo un nuevo marco normativo que considere mejor a la pesca

artesanal, que refuerce las facultades de la entidad administrativa y que impulse económicamente al sector.

II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA COLOMBIANO

La diversidad de sus especies biológicas y el tamaño de su cuenca hidrográfica marcan favorables condiciones físicas y biológicas para el desarrollo del sector pesquero y acuícola en Colombia.

Si bien no existe acuerdo sobre la longitud de las costas del país, las cifras recabadas muestran que el país cuenta con una extensión considerable¹. En *The CIA World Factbook*, se registran 3 208 km, mientras que Martha De la Pava y Ricardo Mora registran 3 000². De acuerdo a la primera fuente, 1 760 km están en el mar Caribe, mientras que en la segunda, 1 642³. Y en forma análoga, en el Océano Pacífico habrían 1 448 km de costa versus 1 300. A ello es preciso agregar más de 20 000 km de cuencas hidrográficas⁴.

Estas medidas permiten señalar una suma de cuerpos de agua permanentes de miles de kilómetros cuadrados⁵ distribuidas en ciénagas, lagos y embalses, como también una Zona Económica Exclusiva de cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados⁶. Parte importante de esta área se ha visto amenazada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, mermando tanto las posibilidades de desarrollo del sector como el bienestar de la población en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Esta medida no ha mermado el potencial genérico que el sector tiene para el país. De acuerdo con De la Pava y Mora, la pesca en Colombia tiene características especiales intrínsecas que le aportan una capacidad productiva particular:

“i) Amplia diversidad de especies: se estima que tanto a nivel comercial tanto marítimo como continental se aprovechan cerca de 150 especies incluidas las ornamentales dentro de un potencial de especies que aún no se ha determinado con certeza.

ii) es un recurso natural finito

iii) es un recurso de carácter comunal no privado de libre acceso, y

¹ Los desacuerdos surgen por las diferencias en la escala de medición. La llamada “paradoja de la línea de costa” consiste en que mientras más pequeña es la escala de la medición de una costa, mayor será su magnitud.

² De la Pava, M. y Mora, R. (s.f.) Evaluación de la Ley 13 de 1990 como instrumento de la política pesquera.

³ CIA, *The World Factbook*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2060.html>

⁴ IGAC-2010, en De la Pava y Mora.

⁵ La exposición de motivos del Proyecto de ley 126 de 2010 señala 238 000 hectáreas (2380 km²), mientras que De la Pava y Mora señalan 700 000 hectáreas (7000 km²).

⁶ 817 816 km² según Proyecto Sea Around Us (Universidad de British Columbia y el Pew Environment Group), <http://www.seaaroundus.org/eez/170.aspx>. 988 000 km² en la exposición de motivos PL 126/2010.

iv) obedece a una dinámica biológica y ambiental para su producción”⁷.

Estas condiciones permiten afirmar, de acuerdo con De la Pava y Mora y otras fuentes, que Colombia cuenta con una alta diversidad tanto de ecosistemas acuáticos como de especies hidrobiológicas.

No obstante, esta realidad no encuentra un correlato con el nivel de desarrollo del sector en el país.

La producción pesquera mundial hacia 2009 ascendía a 150 millones de toneladas anuales. De estas, el 63 % correspondían a la pesca y el 37 % restante a la acuicultura. En el caso colombiano, la producción anual ha oscilado, desde el año 2000 en adelante, entre los 150 mil y 200 mil toneladas anuales, con 165 mil toneladas de promedio según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR; Gráfico N° 1)⁸. Según datos del MADR citados por De la Pava y Mora, el 50 % de la producción corresponde a la pesca industrial, el 23 % a la pesca artesanal y el 27 % restante a la acuicultura⁹.

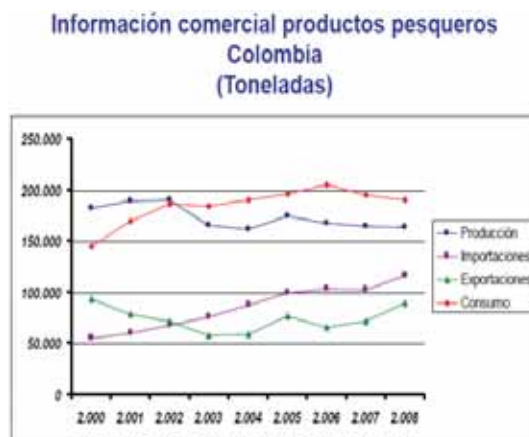


Gráfico N° 1: Producción, importación, exportación y consumo de productos pesqueros en Colombia, 2000-2008.

Fuente: Torres, J. (s.f.) Presentación Proyecto de Ley General de Pesca y Acuicultura de 2010.

Bancada Miraísta.

En 2008 Colombia produjo 194.500 toneladas, siendo de pesca un 72% y de acuicultura un 28%. Es decir, con 988 mil kilómetros cuadrados de aguas en ese momento, es decir, el 0,7% del total de zonas económicas exclusivas del mundo, el país produjo solo un 0,13% de los productos pesqueros a nivel mundial; es decir, tan solo una quinta parte de su proporción de aguas¹⁰.

Del mismo modo, de acuerdo a las cifras del DANE citadas por De la Pava y Mora, la partici-

pación del sector en el Producto Interno Bruto del país alcanzó a solo un 0,2%. De manera más sorprendente, la presencia del sector en el PIB Agropecuario llega a solo un 3 % del PIB Agropecuario, cifra que se ha mantenido estancada durante toda la década¹¹.

Este contraste entre el potencial del sector y el nivel de desarrollo actual hace necesaria una iniciativa que lo fomente a todo nivel, tanto en pesca como en acuicultura, tanto a pequeña como mediana y gran escala, y tanto en aguas continentales como marinas.

Otra razón para considerar un proyecto de ley de esta naturaleza es la brecha entre producción y consumo, que se observa en el Gráfico N° 1. En Colombia, si en 2000 la producción pesquera y acuícola superaba el consumo, con los años esta situación se fue revirtiendo. A pesar de las condiciones de abundancia y diversidad descritas, los incrementos de la producción no lograron superar al gran incremento en el consumo.

Ya en la fundamentación del proyecto de ley de 2010 se señalaba: “(...) La producción pesquera de los últimos años ha tenido leves incrementos en razón a la producción por acuicultura. Las capturas se han mantenido constantes observándose dificultades en la pesca continental y la pesca de camarón en ambos océanos”.

Este estancamiento en la producción –particularmente la pesquera– ha venido acompañado, como se observa en el gráfico N° 1, que el nivel de importaciones subió sostenidamente para poder cubrir la brecha con el nivel de consumo.

En definitiva, Colombia ha llegado a la paradoja de producir menos productos pesqueros y acuícolas de los que consume.

Esta necesidad de importar para abastecerse internamente, según De la Pava y Moreno, ha redundado en un estancamiento del propio consumo, debido al incremento en el costo final que los productos importados suponen.

El resultado es que Colombia no solo no alcanza a producir para la totalidad de su consumo, sino que además su consumo *per se* no alcanza los estándares de alimentación mínimos internacionales ni los promedios regionales: “Según la FAO, el promedio de consumo de productos pesqueros para Latinoamérica se encuentra en los 9,2 kilogramos per cápita al año. En Colombia este consumo solo llega a 5,5 kilogramos per cápita”¹².

Otro aspecto destacable del sector en Colombia es el impacto laboral y, por lo tanto, social, que él conlleva. En este sentido, se debe recalcar el aporte de la pesca artesanal: no solo constituye, como se señalaba anteriormente, casi un quinto de la producción pesquera y acuícola según el MADR, sino que además, como señalan De la Pava y Mora con cifras de Incodec (2010), beneficia a 400 mil familias versus los 32 mil empleos

⁷ De la Pava y Mora.

⁸ Torres, J. (s.f.) Presentación Proyecto de Ley General de Pesca y Acuicultura de 2010, Bancada Miraísta.

⁹ De la Pava y Mora.

¹⁰ Considerando un total de zonas económicas exclusivas de 140 934 706 km², según el proyecto Sea Around Us, y considerando el total de producción citado de 150 millones de toneladas anuales.

¹¹ De la Pava y Mora.

¹² De la Pava y Mora.

generados por la pesca industrial. La acuicultura en tanto da trabajo directo o indirecto a 90 mil personas.

Es evidente por lo tanto el impacto social que todo el sector, mas especialmente la pesca artesanal y acuicultura, genera en muchas familias de las zonas costeras y ribereñas del país.

III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

a) Problematicación general

Considerando los antecedentes expuestos, se considera el análisis de De la Pava y Mora, con base en información de Incoder y Dimar (Documento Visión Colombia 2019). En su concepto, los obstáculos para el desarrollo pesquero son:

“(1) La baja capacidad de los pequeños y medianos productores para desarrollar proyectos rentables.

(2) El restringido acceso al crédito y la falta de incentivos y garantías.

(3) La carencia de procedimientos y tecnologías eficientes para la producción.

(4) Las deficiencias en los canales de comercialización y focalización de mercados, acopio, manipulación, procesamiento y transporte de sus productos.

(5) La baja consolidación gremial y productiva.

(6) La insuficiencia de programas de infraestructura para la investigación y la generación de información para la toma de decisiones.

(7) El estado y el tipo de la flota pesquera y la capacitación y profesionalización de la gente de mar.

(8) El alto valor de insumos como el combustible.

(9) El alto costo del concentrado en acuicultura, que representan el 60% del valor de producción, así como la dependencia de especies introducidas”.

b) Los límites de la Ley 13

La aprobación de la ley 13 en 1990, buscó dotar de un marco normativo para la administración de los recursos pesqueros y acuícolas. Si bien esta misión fue cumplida, queda muy lejos de las aspiraciones del sector. Los resultados de las mesas de trabajo con comunidades y nodos de pesca en 2013 muestran que la ley ha tenido dificultades para poder generar una política de pesca y acuicultura, no ha logrado hacer cargo de dotar al sector de un sistema de información y no ha favorecido la articulación de los diferentes sectores de la pesca y la acuicultura.

Parte de la eficacia de la ley ha estado afectada, según De la Pava y Mora, por la fragmentación institucional a la hora de asignar responsabilidades de administración, control y vigilancia: antes de la creación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), existían cuatro instituciones del MADR. Ya se ha dado un gran paso con la creación, mediante el Decreto núme-

ro 4181 (2011), de la Aunap. Hoy falta consolidar ese paso, asegurando a esta institución facultades y presupuesto, y fortaleciendo la investigación aplicada al sector;

c) Los gremios y su participación en las decisiones del sector

Para ambos autores, otra dificultad es la falta de fortaleza de los entes asociativos de los distintos actores del sector (empresarios, trabajadores) en las esferas de toma de decisiones relevantes para la pesca y la acuicultura, ya sea a nivel legislativo o en los distintos niveles del poder ejecutivo, nacional, departamental o local;

d) Las dificultades para el impulso de la pesca artesanal

i. Su presencia respecto de la pesca industrial.

Una dificultad fundamental para los trabajadores de la pesca artesanal es su presencia decreciente en desmedro de la pesca industrial. Las estadísticas oficiales encargadas a Corporación Colombia Internacional (CCI) entre 2006 y 2010 muestran dos realidades preocupantes en torno a la pesca marina (tabla N° 1).

Una, desde la zona Caribe, donde la proporción de toneladas capturadas pesca artesanal respecto del total ha descendido en casi un tercio en el periodo. La segunda, desde la zona Pacífico, donde la pesca artesanal mantiene un bajo nivel de toneladas capturadas respecto de la pesca industrial, a pesar del leve incremento en el periodo.

ZONA	TIPO PESCA	2006	2007	2008	2009	2010
CARIBE	P. Artesanal	91%	89%	79%	87%	65%
	P. Industrial	09%	11%	21%	13%	35%
PACÍFICO	P. Artesanal	04%	05%	06%	13%	11%
	P. Industrial	96%	95%	94%	87%	89%

Tabla N° 1: Porcentajes de captura en toneladas de pesca marina artesanal e industrial por zonas. Elaboración de Valentina Ramírez, con datos de CCI, 2011.

Este mismo indicador no fue posible encontrarlo para la pesca en aguas continentales, por falta de datos. Tanto esta situación como el hecho de que no se encuentren datos para después de 2011, refleja parte de las debilidades del sistema de información del sector¹³.

Solo fue posible encontrar estadísticas del mismo origen para la pesquería de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que puede servir como ejemplo de la situación en aguas continentales. Allí, según CCI, las toneladas de captura mediante artes de pesca artesanales totalizaban 6164 en 2008; para 2012, estas alcanzaban solo 5317, un 14% menos.

Del mismo modo, la información de CCI para esa zona señala que las artes de pesca de crecimiento más relevante son: la red de enmalle boliche, las nasas y las atarrayas; artes que no son se-

¹³ La fuente original de CCI disponible en línea contabiliza hasta octubre de 2011, por lo que ese año no es considerado en la Tabla N° X. Las estadísticas después de 2011 pasaron a ser responsabilidad de la Aunap, pero la entidad no posee registros conocidos ni accesibles libremente en línea.

lectivas en las especies ni en el tamaño de captura, por lo que la viabilidad del sector se ve seriamente amenazada.

ii. Las Tallas Mínimas de Captura.

Al mismo tiempo, otro problema recurrente es el de la disminución en las tallas de captura, trasgrediendo incluso las normas fijadas de Talla Mínima (TMINC). Con ello queda de manifiesto la necesidad de mejorar la regulación y la vigilancia del sector pesquero y acuícola.

Las estadísticas de tallas mínimas de captura publicadas por CCI entre 2006 y 2011 muestran que una gran parte de las capturas de todas las especies y en todas las zonas de Colombia no son sustentables pues, entre otros aspectos, no cumplen con la normativa de Talla Mínima de Captura (TMINC).

CCI realizó mediciones para las distintas especies que se capturan en las distintas zonas marinas (Caribe, Pacífico) y continentales (cuencas de los ríos Magdalena, Sinú, Atrato y Orinoco). Contando todas las especies por todos los años considerados, se cuentan 217 mediciones.

De estas 217 mediciones, en 111 la talla de captura promedio para una especie, en un año y una zona dada, era menor que la TMINC establecida para esa especie. Es decir, en solo las 106 restantes sí se cumplía la normativa y en más de la mitad de las capturas se está minando la sustentabilidad del sector. El detalle está en la Tabla N° 2.

AÑO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
ESPECIES EN RIESGO	24	28	21	16	19	3	111
ESPECIES FUERA DE RIESGO	20	16	36	15	16	3	106
TOTAL ESPECIES ANALIZADAS	44	44	57	31	35	6	217

Tabla N° 2: Número de especies cuya talla promedio de captura es menor a la TMINC (“Especies en riesgo”) versus talla igual o mayor a la TMINC (“Especies fuera de riesgo”) entre 2006 y 2011. Elaboración de Juan Ayarza, con datos de CCI, 2011, recopilados por Valentina Ramírez.

iii. Las dificultades en la gestión de insumos y apoyos

Uno de los problemas comunes en la gestión de insumos, créditos y otros apoyos es la presencia de intermediarios que dificultan su tramitación exitosa. Para ello, la ley plantea la carnetización de los trabajadores de la pesca y acuicultura que, en el futuro, pueda funcionar como medio oficial de recepción de los apoyos y como medio de compra de insumos.

El ejemplo más claro en este sentido es la Tarjeta Cafetera Inteligente, que identifica a los cafeteros que no reúnen los criterios para estar federados. La Tarjeta contiene banda magnética y chip, pudiendo ser usado en tanto tarjeta bancaria. Hoy existen más de 6.000 cajeros y 1.500 establecimientos que la aceptan;

e) Las debilidades en los datos: un testimonio de la desinformación del sector

La debilidad del sector pesquero en Colombia no se evidencia solo con su mínima contri-

bución al PIB sino también con la desinformación y falta de datos estadísticos que permitan evaluar su estado. El testimonio a continuación fue escrito por una persona del equipo que redactó el proyecto de ley. No pertenece a ninguna institución pública y no contaba con ningún privilegio especial o distinto al de cualquier otro ciudadano o ciudadana nacional o extranjero(a) para pedir información. El escrito da cuenta de las deficiencias en la recolección y, sobre todo, difusión de información.

“En 2011, el Decreto número 4181 crea la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, como entidad descentralizada de la rama ejecutiva para hacerse cargo de todos los temas pertinentes del sector; le entrega la planificación, investigación, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera y acuícola.

Desde 2012 que esta entidad comenzó a funcionar no ha difundido públicamente información y estadísticas sobre el sector. La sección de Gestión del Conocimiento de su página web, el lugar preciso para difundir información, no registra datos a octubre de 2013.

Al comunicarse con la entidad, explican que solo llevan un año y medio de funcionamiento, razón por la cual hasta ahora se encuentran en la consolidación de la información. Remiten a la Corporación Colombia Internacional (CCI), que junto al Incoder por un convenio que terminó en 2011, se encargó de recolectar y suministrar la información sobre el sector.

En la página del CCI no es posible encontrar el link hacia su Sistema de Información; este fue facilitado en cambio por un funcionario o funcionaria de la Aunap. Estos informes presentan información del 2006 a 2010 en los Boletines Anuales; hasta octubre en los Boletines Mensuales; y hasta diciembre en los Boletines Semanales; la información que allí se encuentra describe las toneladas de recursos pesqueros, qué porcentaje se capturó de manera industrial y de manera artesanal, la cantidad de cada uno de las especies, su situación biológica, análisis de precios y de mercados.

El Instituto Colombiano Agropecuario, como entidad inscrita al Ministerio de Agricultura, *tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio.* En su área de pesca y acuicultura tiene un texto en el que describe las funciones *de administrar los recursos pesqueros del país, así como la investigación y ordenación de la pesca y la acuicultura en Colombia* que le confiere el De-

creto Reglamentario 4904 de 200, sin embargo al entrar al link Estadísticas de Pesca y Acuicultura, se abren tablas que dan información sobre los desembarcos pesqueros marinos y continentales, el porcentaje de especies capturadas, pero esta información es solo hasta el 2006.

El Ministerio de Agricultura en la Dirección de Pesca y Acuicultura presenta Documentos de Interés para el Sector Pesquero y de la Acuicultura, sin embargo, no es posible acceder a estos. Agronet que es una dependencia de este ministerio presenta cifras estadísticas sobre el sector pesquero, pero al entrar a estos links la información es la misma que da la CCI.

Invenmar, como entidad investigativa en el tema de pesca, da acceso a dos sistemas de información, uno (Sipein) muy sencillo de usar para conocer toda la información sobre capturas, arte de pesca, especie, solo en el área de la Ciénaga Grande de Santa Marta; y uno (Geovisor ANH Caladeros de Pesca), más complejo, que hace mapeos sobre el territorio marino en 2010.

La Dimar, como entidad directora, coordinadora y que ejerce el control sobre las actividades marítimas solo presenta información sobre los buques extranjeros que tienen permiso para participar de las faenas de pesca en aguas nacionales.

El DANE, como entidad oficial encargada de levantar y analizar las estadísticas oficiales, en su sección de información sobre el sector agropecuario no incluye al subsector pesquero y acuícola en las estadísticas.

Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) es la entidad internacional que se encarga de informar sobre el sector agrícola, tiene en su página web el perfil sobre la pesca y acuicultura en diferentes países. No obstante, la ficha con información más reciente sobre el sector pesquero y acuícola de Colombia data de 2003. Ello deja en evidencia la falta de actualización no solo a nivel nacional, sino también internacional, el cual en muchos casos se nutre del nacional”.

De acuerdo a este testimonio, entre las fallas importantes están:

1. No se observan estadísticas ni completas ni continuas de los años que el mandato de recopilación de esas estadísticas pretende describir.
2. Al no ser completas, las cifras no permiten hacer un diagnóstico certero del sector. Por ejemplo, en las cifras publicadas de toneladas capturadas no es posible determinar ninguna tendencia al alza o a la baja.
3. Las estadísticas sobre tallas de captura tampoco son continuas en cuanto a las especies que se capturan y a las regiones consideradas.

IV. MARCO NORMATIVO¹⁴

a) Antecedentes constitucionales

El artículo 65 de la Constitución Política de 1991 señala que:

“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, **se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales**, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.

El desarrollo de este artículo está en la Ley General de Desarrollo Agropecuario y pesquero, N° 101 de 1993. Su artículo 6° señala que:

“En desarrollo del artículo 65 de la Constitución Política, **el Gobierno Nacional otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, y su comercialización**. Para este efecto, **las reglamentaciones** sobre precios, y costos de producción, régimen tributario, sistema crediticio, inversión pública en infraestructura física y social, y demás políticas relacionadas con la actividad económica en general, **deberán ajustarse al propósito de asegurar preferentemente el desarrollo rural**”.

b) Evolución temporal de leyes y decretos sobre pesca y acuicultura.

La evolución de las entidades administrativas vinculadas a la pesca y acuicultura en Colombia ha sido especialmente dinámica, pero sin que ese dinamismo traiga un mejor ajuste a las necesidades del sector. Por el contrario, los continuos cambios de prioridades, instituciones y facultades ha dificultado –en la visión de las comunidades de pescadores consultadas en las Mesas de Trabajo– una acción coherente y de largo plazo.

La Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991 constituyen el marco normativo fundamental de la pesca y la acuicultura en Colombia.

La aprobación de la Ley 13 en 1990 creó el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), adscrito al MADR. Esta entidad fue liquidada por Decreto número 1293 en 2003 y sus funciones fueron transferidas al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), creado el mismo año por Decreto número 1300 y también adscrito al MADR.

En 1999 se aprobó el Decreto número 2478, que modificaba ciertas funciones del MADR. Entre sus disposiciones vigentes está la función del Ministerio de regular los mercados internos de productos agropecuarios y pesqueros, determinar la política de precios de dichos productos y sus insumos, y adoptar medidas o acciones correctivas de distorsiones en las condiciones de competencia interna de los mercados de dichos productos.

¹⁴ Esta sección está basada en De la Pava y Mora.

La aprobación de la Ley 1152 en 2007 buscaba crear la Dirección de Pesca y Acuicultura en el MADR, como entidad coordinadora de la ejecución de la política agraria y acuícola. Del mismo modo, buscaba traspasar las facultades de ordenamiento, investigación, registro y control a la nueva Subgerencia de Pesca y Acuicultura del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), creado por Decreto número 4904 ese mismo año. No obstante, la Sentencia C-175 de la Corte Constitucional (2009) declaró inexecutable la ley.

En 2011 el Decreto número 4181 creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Unidad Administrativa Especial adscrita al MADR¹⁵. El decreto buscó concentrar en la Aunap todas las facultades antes dispersas en otras instituciones¹⁶. Solo quedaron en el Incodec ciertas competencias de fomento que, en lo sucesivo, serían traspasadas de todos modos a la Aunap¹⁷.

A pesar de estos esfuerzos, directivos de la Aunap han señalado a este equipo las debilidades con las que cuentan, especialmente, en las áreas de fomento a la actividad y de vigilancia y capacidad de sancionar y hacer cumplir las sanciones previstas en el marco normativo.

El 12 de septiembre de 2013 una serie de decretos motivados en lo inmediato por la coyuntura del paro agrario trajeron cambios al sector. En particular el decreto 1985 reorganizó la estructura y funciones del MADR. Se estableció la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas, a cargo del Viceministerio de Asuntos Agropecuarios, suprimiendo la antigua oficina del MADR a cargo de la formulación de la política del sector.

c) Normativa internacional relevante.

La tabla N° 3 es una selección de acuerdos firmados por Colombia, preparada por el Ministerio del Medio Ambiente¹⁸. Destaca la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que Colombia firmó con los primeros países en 1982, pero que –31 años después– aún no ha ratificado¹⁹. Por lo tanto, no está siendo aplicada en la legislación interna.

NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN	APROBACIÓN EN COLOMBIA
Convención sobre la plataforma continental.	29 de abril de 1958, Ginebra.	Ley 9ª de 1961
Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar.	29 de abril de 1958, Ginebra.	Ley 119 de 1961

NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN	APROBACIÓN EN COLOMBIA
Convención relativa a la organización consultiva marítima intergubernamental.	6 de marzo de 1948, Ginebra.	Ley 6ª de 1974
Convenio sobre delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre las Repúblicas de Colombia y del Ecuador.	23 de agosto de 1975, Quito.	Ley 32 de 1975
Tratado de áreas marinas y submarinas y asuntos conexos entre la República de Panamá y la República de Colombia.	20 de noviembre de 1976, Cartagena de Indias.	Ley 4ª de 1977
Tratado sobre delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre la República de Colombia y la República de Costa Rica.	17 de marzo de 1977, San José de Costa Rica.	Ley 8ª de 1978
Acuerdo sobre delimitación de fronteras marítimas entre la República de Colombia y la República de Haití.	17 de febrero de 1978, Port-au-Prince.	Ley 24 de 1978
Acuerdo sobre delimitación de áreas marinas y submarinas y cooperación marítima entre la República de Colombia y la República Dominicana.	13 de enero de 1978, Santo Domingo.	Ley 38 de 1978
Convenio de incorporación de Colombia al sistema del Pacífico sur y la adhesión de Colombia a los principios y normas fundamentales contenidas en la declaración de Santiago.	Convenio: 9 de agosto de 1979, Quito; Principios: 18 de agosto de 1952, Santiago de Chile.	Ley 7ª de 1980
Convenio sobre la organización de la comisión permanente de la conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas marítimas del Pacífico Sur.	18 de agosto de 1952, Santiago de Chile.	Ley 7ª de 1980
Convención sobre personalidad jurídica internacional de la comisión permanente del Pacífico Sur.	18 de agosto de 1952, Santiago de Chile.	Ley 7ª de 1980
Declaración sobre zona marítima.	18 de agosto de 1952, Santiago de Chile.	Ley 7ª de 1980
Convención internacional para la prevención de la contaminación por buques – Marpol 73.	2 de noviembre de 1973, Londres.	Ley 12 de 1981
Protocolo de 1978 relativo al convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973 Marpol 73/prot/78.	17 de febrero de 1978, Londres.	Ley 12 de 1981
Acuerdo de pesca entre la República de Colombia y Jamaica.	30 de agosto de 1984, Cali.	Ley 34 de 1986
Tratado sobre delimitación marítima entre la República de Colombia y Jamaica.	12 de noviembre de 1993, Kingston.	Ley 90 de 1993
Acuerdo por el cual se establece la Organización Mundial de Comercio, "OMC" y sus acuerdos multilaterales anexos.	15 de abril de 1994, Marrakech.	Ley 170 de 1994
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias.	15 de julio de 1989, Montevideo.	Ley 449 de 1998
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.	10 de diciembre de 1982, Montego Bay, Jamaica.	Colombia no ha incorporado a su legislación nacional ni ha ratificado a la convención.

Tabla N° 3: Acuerdos y convenciones firmados por Colombia y ratificados, si aplica, relacionados con la pesca y la acuicultura. Selección a partir de datos del Ministerio del Medio Ambiente.

Adicionalmente, Colombia ha firmado el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO en 1995, y la Declaración de Kioto sobre Contribución Sostenible de la Pesca a la Seguridad Alimentaria el mismo año.

¹⁵ Un decreto posterior (el 4182 del mismo año) estableció la planta de la institución.
¹⁶ Facultades de “planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control”, de acuerdo al artículo 3°.
¹⁷ Según funcionario de Incodec consultado por estas materias vía telefónica en noviembre de 2013.
¹⁸ http://www.minambiente.gov.co/Puerta/destacado/vivienda/gestion_ds_municipal/NORMAS/TratadosConvenios.doc
¹⁹ Ver Naciones Unidas, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en

Además, el acuerdo comercial Colombia – Unión Europea ha producido bajas en los aranceles del sector. Si antes del acuerdo estos variaban entre el 2 y el 26 %, hoy estos son cero con la entrada en vigencia del acuerdo en julio de 2013²⁰.

Finalmente, de acuerdo a De la Pava y Mora, el país participa de entidades internacionales como Infopesca, la Red de Acuicultura de las Américas RAA, el Comité permanente del Pacífico Sur-CPPS, y la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur.

d) Algunas sentencias relevantes de la Corte Constitucional relativas a la pesca y acuicultura

i. Sentencia T-605/92

PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. PESCA. TUTELA CONTRA PARTICULARES. CONCEDIDA.

6. La zona económica exclusiva.

El artículo 101 de la C. P., al reconocer a la zona económica exclusiva como parte del territorio, no hace otra cosa que aceptar la actual posición del derecho internacional.

El tratadista Marco Gerardo Monroy Cabra investiga los antecedentes de esta figura novedosa del derecho internacional que conjuga manifestaciones de la zona de altamar (p. ej. libertad de navegación) y del mar territorial (derechos soberanos con el fin de explorar y explotar recursos naturales). Dice:

“Según lo expresa F.B. García Amador, “los antecedentes más remotos de la zona económica exclusiva en lo referente a los recursos vivos son los siguientes: La reivindicación de las llamadas “pesquerías sedentarias”, la del derecho de propiedad y de protección sobre las focas del mar de Bering y de otros recursos, y la de una determinada área del Estuario de Moray”. Sin embargo, los antecedentes inmediatos de la zona económica exclusiva se encuentran en los actos unilaterales de los Estados Latinoamericanos colindantes en el océano Pacífico bajo la idea de compensación respecto a los recientes reclamos de extensas plataformas continentales de otros Estados. Luego, el reconocimiento y desarrollo de la zona económica siguió con el establecimiento de la Comisión Ad Hoc de los Fondos Marinos por la Asamblea General de la ONU (1967). El proceso de aceptación de esta zona continúa con las Declaraciones de Montevideo y Lima de 1970, Santo Domingo de 1972 y la opinión del Comité Jurídico Consultivo Afro-Asiático que tomó posición favorable a la nueva zona, proceso que llevó de Colombo a Yaoundé y Lagos de (1971 a 1972) y culminó con la Declaración de la Organización de la Unidad Africana (Adís Abeba, 1973).

La zona económica implica una redistribución de los recursos vivos del mar y en la forma como está concebido en el proyecto de Convención sobre el Derecho del Mar cubre el treinta y seis por

cientos de los océanos y proporcional el noventa y cuatro por ciento de las pesquerías en explotación”^[3].

Otro tratadista colombiano, Enrique Gaviria Liévano, precisa qué es la zona económica exclusiva:

“La denominación de “zona económica exclusiva” se logró después de acalorados debates en la III Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Inicialmente se habló de “mar patrimonial”, “zona exclusiva de pesca” o simplemente “zona económica”. Hoy se acepta la denominación de zona económica exclusiva con una extensión de 200 millas, medidas desde donde se mide la anchura del mar territorial.

El concepto mismo de “zona económica” planteó acalorados debates sobre su régimen jurídico, pues no se sabía a ciencia cierta si se trataba de un mar territorial, de una zona contigua, o simplemente de altamar. Hoy se sabe que la “zona económica” no es ni altamar ni mar territorial ni zona contigua, sino que tiene un sistema híbrido que trata de conciliar los derechos del Estado ribereño con el de los terceros, y su ejercicio está sujeto al respeto correlativo de los intereses en juego.

A favor del Estado ribereño se reconoce no solo soberanía exclusiva sobre los recursos naturales que se encuentren en los fondos marinos, en el subsuelo y en las aguas suprayacentes, sino también jurisdicción respecto del uso y control de sus aguas (establecimiento de instalaciones, investigación científica, prevención del medio marino, etc.). A los terceros Estados se les reconoce derecho de sobrevuelo, libre navegación y tendido de cables submarinos sobre dichas aguas. Es decir, se les reconocen las tradicionales libertades de altamar, excepción hecha de la pesca, que queda reservada al Estado ribereño o costero en la extensión señalada”^[4].

Como el propio artículo 101 de nuestra Constitución Política supedita el calificativo de Territorio a la zona económica exclusiva “de conformidad con el Derecho Internacional”, hay que acudir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, Montego Bay, 10 de diciembre de 1982, en virtud del principio de aplicación del Derecho Internacional Consuetudinario aceptado por Colombia, no solo porque el artículo 9° de la C.P. ordena que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan también en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, sino porque el artículo 101 de la ley de leyes incorporó en su texto el término “zona económica exclusiva” que surgió en la Convención de las Naciones Unidas sobre el mar, en 1982. Allí se define la zona económica exclusiva en el artículo 55:

“Un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta parte, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado

²⁰ Datos de Proexport. <http://ue.proexport.com.co/oportunidad-por-sector/agroindustria/acuicola-y-pesquero>

ribereno y los derechos y libertades de los demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención”.

La Convención también fija la extensión del mar territorial (hasta 12 millas marinas) y a sus aguas se las llama “aguas interiores” (artículo 3°); indica que la zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas (artículo 33) y el artículo 56 relaciona los derechos, jurisdicción y deberes en la zona económica exclusiva:

“Artículo 56. Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva. *En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene:*

a) *Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.*

b) *Jurisdicción con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con respecto a:*

i) *El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; ii) la investigación científica marina; iii) la protección y preservación del medio marino.*

c) *Otros derechos y deberes previstos en esta Convención.*

2. *En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de esta Convención.*

3. *Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo se ejercerán de conformidad con la Parte VI”.*

Los anteriores derechos, jurisdicción y deberes, según la misma Convención del mar, son normativamente protegidos y pueden ser desarrollados, en efecto:

“Artículo 73. Ejecución de leyes y reglamentos del Estado ribereño.

1. *El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos vivos de la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas que puedan ser necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos dictados de conformidad con esta Convención, incluidas la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales.*

2. *Los buques apresados y sus tripulantes serán liberados con prontitud, previa constitución de una fianza razonable y otra garantía.*

3. *Las sanciones establecidas por el Estado ribereño por violaciones de las leyes y los reglamentos de pesca en la zona económica exclusiva no podrán incluir penas privativas de libertad, salvo acuerdo en contrario entre los Estados interesados, ni ninguna otra forma de castigo corporal.*

4. *En los casos de apresamiento o retención de buques extranjeros, el Estado ribereño notificará con prontitud al Estado del pabellón por los conductos apropiados, las medidas tomadas y cualesquiera sanciones impuestas subsiguientemente”.*

En Colombia ya se han expedido algunas normas:

La Ley 13 de 1990, Estatuto General de Pesca, dice entre otras cosas que pertenecen al dominio público del Estado los recursos hidrobiológicos contenidos en el mar territorial, en la zona económica exclusiva y en las aguas continentales. (Como se aprecia, esta ley ya recogía la noción aceptada en 1982 en la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar).

El Decreto número 2256 de 1991, “por el cual se reglamenta la Ley 13 de 1990”, en su artículo 15 dice que el INPA tiene jurisdicción en todo el territorio nacional (obviamente en zona económica exclusiva) y el artículo 170 establece: “La Armada Nacional retendrá las embarcaciones pesqueras que sean sorprendidas pescando...”.

El Decreto número 2324 de 1984, por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria, señala en su artículo 2° que la Dimar ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva y permite que buques de la armada visiten buques de bandera extranjera cuando se sospeche que han cometido infracción”.

iii. Sentencia T-348/12.

ASOPESCOMFE vs. DISTRITO TURÍSTICO DE CARTAGENA Y OTROS

Resumen: La Asociación de Pescadores de las Playas de Comfenalco (Asopescomfe) solicita que se les amparen los derechos fundamentales a sus integrantes y, en consecuencia, se ordene al Consorcio Vial al Mar que se abstenga de encerrar el sitio donde los pescadores parquean sus botes de madera y realizan su labor de pesca, hasta tanto no se llegue a un acuerdo sobre el resarcimiento de los perjuicios que les están causando con la realización del proyecto denominado Anillo Vial Malecón de Crespo, el que se desarrolla en el lugar donde desde hace muchos años han ejercido la pesca artesanal.

La Sala analiza la siguiente temática:

1. El derecho a la participación de comunidades locales en construcción de megaproyectos que generan una afectación al ambiente e impactan a las comunidades asentadas en su área de influencia.

2°. El derecho a la libre escogencia de oficio y al trabajo en comunidades de economía de subsistencia, y

3°. El derecho a la alimentación y el concepto de soberanía alimentaria. Se concluye que las entidades demandadas sí vulneraron derechos fundamentales de los integrantes de la asociación demandante y, en consecuencia, se ordena, teniendo en cuenta los impactos actuales de las actividades de la obra que se ejecuta, garantizar espacios de concertación con los afectados en los que se tengan en cuenta sus opiniones.

Así mismo, se dispone que se diseñe, en conjunto con los integrantes de la asociación, medidas de compensación que deben ser acordes con la calidad del oficio desarrollado como pescadores artesanales y no, necesariamente de naturaleza económica. Se Concede²¹.

Extractos relevantes:

“2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

2.5. Derecho a la alimentación y concepto de soberanía alimentaria.

2.5.5 (...) El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas^[46] ha afirmado que el derecho a la alimentación implica la capacidad de tener acceso a alimentos sanos que aseguren una alimentación digna, e incluye en ello, el derecho de los grupos vulnerables y discriminados a tener acceso a la tierra, a la producción en pequeña escala, a participar de los mercados locales y rurales, **a las áreas tradicionales de pesca**, entre otros. La garantía de esos derechos se realiza, además, en el marco de la libre elección de prácticas de subsistencia de las comunidades.

Ahora bien, concretamente en relación con los grupos y asociaciones de pescadores artesanales o de pequeña escala a nivel mundial, que se han fortalecido también por el movimiento mencionado^[47], es importante hacer alusión a la Conferencia Global de Pescadores de Pequeña Escala realizada por el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO en Bangkok en el 2008, en la que se redactó un documento en el que se reconocen los derechos humanos de las comunidades pesqueras artesanales. Lo importante del contenido de la declaración –que también es basada en el concepto de soberanía alimentaria– es que reconoce un conjunto de derechos entre los cuales está el de asegurar el **acceso** de estas comunidades a sus espacios marinos tradicionales de pesca y el de **garantizar su participación en las decisiones que afectan las costas donde ejercen su oficio**, participación que debe ser previa, informada y bajo su consentimiento^[48]. Asimismo, se invita a los Estados a proteger la identidad cultural, la dignidad humana y el ejercicio de los derechos tradicionales de las comunidades pesqueras, y se reconoce la interdependencia e interconexión entre el bienestar y calidad de vida de las comunidades costeras y los ecosistemas acuáticos de los que depende su sustento diario^[49].

2.5.6. En el caso colombiano, la Constitución Política de Colombia menciona el derecho a la alimentación equilibrada como un derecho fundamental de los niños/as (artículo 44), la protección a la mujer en embarazo (artículo 43). En cuanto a la protección especial a la producción alimentaria y mecanismos para lograrlo, la Constitución establece en los artículos 64, 65, 66, 78 y 81 los deberes del Estado en esta materia.

Es necesario resaltar el artículo 65, el cual dispone que **“La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales (...)”**. Esta norma muestra indudablemente la protección especial del derecho a la alimentación, desde el punto de vista de la producción de alimentos, dándose prevalencia, entre otras actividades, a la actividad pesquera.

2.5.7 (...) La Corte Constitucional en Sentencia T-574 de 1996^[55] conoció de una acción de tutela interpuesta por una comunidad de pescadores de Salahonda, en el sector La Playa, en el departamento de Nariño, que alegaban la vulneración de sus derechos a la libertad de oficio y a la ecología marítima, debido a las consecuencias perjudiciales que se generaron por el vertimiento de petróleo en las aguas donde desarrollaban su oficio de pesca, causado por la falta de mantenimiento de unas mangueras submarinas de propiedad de la empresa Ecopetrol S.A. Los accionantes advertían que eran una comunidad eminentemente pescadora y, en esa medida, la empresa responsable debía reparar los daños ocasionados al ecosistema y a las familias de los pescadores que vivían y subsistían de la pesca.

En ese caso, se comprobó que la comunidad se edificaba sobre la única labor que tradicionalmente han desarrollado, la pesca, resultaba afectada, y por ende, los derechos a la alimentación, subsistencia y oficio de los pescadores se encontraban en un riesgo inminente. La Corte Constitucional señaló que el Estado debía garantizar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente, con el fin de proteger la diversidad e integridad ecológica y social y para planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

En esa medida, el desarrollo sostenible es un proceso para mejorar las condiciones económicas, sociales y mantener los recursos naturales y la diversidad, que debe propender por garantizar la **sostenibilidad social** la cual *“pretende que el desarrollo eleve el control que la gente tiene sobre sus vidas y se mantenga la identidad de la comunidad”*; y la **sostenibilidad cultural**, que *“exige que el desarrollo sea compatible con la cultura y los valores de los pueblos afectados”*^[56].

Ahora bien, en relación con las prácticas tradicionales de producción y la cultura pesquera concretamente, la Corporación manifestó lo que

²¹ Extractos relevantes:

sigue. Previamente, vale la pena aclarar que a pesar de que la Corte Constitucional se centró en lo establecido en la Ley 70 de 1993 sobre comunidades negras, estas consideraciones son también aplicables a otras comunidades:

“El daño ecológico marítimo afecta sobremanera a quien tiene por oficio la pesca. Y si este oficio forma parte de la cultura de una etnia, con mayor razón hay que proteger al pescador. El artículo transitorio 45 de la Constitución ordenó que la ley estableciera mecanismos para la protección de la identidad cultural de las comunidades negras en la cuenca del Pacífico y para el fomento de su desarrollo económico y social. Así surgió la Ley 70 de 1993 que en el artículo 2º, numerales 5, 6 y 7, precisa:

7. Prácticas tradicionales de producción. *Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuniarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible.*

(...) Si las personas que instauran la tutela pertenecen a una comunidad afectada por el daño ecológico, lo mínimo que se les debe respetar es su espacio vital.

De la misma manera, señaló que el libre ejercicio de oficio debe ser entendido como una libertad fáctica, que encuentra mayor protección en el artículo 65 de la Carta, tratándose de actividades agropecuarias, forestales y pesqueras que el Estado debe fomentar de manera especial, y que se deben interpretar conforme al artículo 54, que establece como obligación del Estado “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar”.

Con base en estas consideraciones, la Corte tuteló los derechos fundamentales a la libertad de oficio y al medio ambiente de los pescadores, y en consecuencia, ordenó a Ecopetrol efectuar un monitoreo en el sector del vertimiento para superar sus efectos, y exigió que dicho monitoreo, fuera realizado por una “comisión interinstitucional” en la que estuvieran los representantes de los pescadores de Salahonda; paralelamente se ordenó a entidades estatales tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos del derrame del crudo.

El análisis realizado por la Corte en esta providencia permite concluir las siguientes afirmaciones: a) con la orden de que la comunidad de pescadores fuera parte de la comisión interinstitucional de monitoreo de las aguas, la Corte reconoció abiertamente el **derecho a la participación y concertación de medidas** con las comunidades en general, en las decisiones que impliquen una afectación al medio ambiente donde habitan o ejercen sus actividades tradicionales; b) el desarrollo sostenible es un proceso que exige mantener la productividad de los sistemas naturales, procurando mejorar las condiciones económicas y sociales de las comunidades que se verán afectadas en su eventual intervención y preservar las prácticas tra-

dicionales de producción. Así, debe garantizarse la **“sostenibilidad social”** en el sentido de elevar el control que la gente tiene sobre sus vidas y mantener la identidad y cultura de cada comunidad; c) es una obligación del Estado proteger el **“espacio vital”**, como una ubicación laboral, en donde la comunidad pesquera ejerce su oficio tradicional; d) finalmente, es deber del Estado fomentar y proteger especialmente la **actividad pesquera**, acorde con el artículo 65 de la Constitución Política.

Además, en la jurisprudencia constitucional, adquiere especial importancia la protección de las “economías tradicionales de subsistencia”, en la medida en que quienes las ejercen son comunidades generalmente pequeñas que han dedicado su vida a una actividad de producción específica, como la pesca, y con ella aseguran su mínimo vital, entendido este, como una garantía de ingresos y medios de subsistencia, porque venden los frutos del mar que toman en el ejercicio de su práctica, y adicionalmente, tienen acceso permanente al alimento para su vida y la de sus familias.

2.5.8. En suma, las comunidades de pescadores y todas aquellas que dependen de los recursos del medio ambiente, merecen una especial atención por parte de los Estados, toda vez que son grupos de personas, en su mayoría de bajos ingresos, que con su oficio artesanal garantizan su derecho a la alimentación y a su mínimo vital. De hecho, es evidente la relación íntima que adquieren estas comunidades con los ecosistemas, que junto con el ejercicio de su oficio tradicional, crean una identidad cultural. Por lo anterior, debe destacarse la importancia del concepto de la soberanía alimentaria, que involucra el respeto de la producción a pequeña escala de alimentos y la diversidad de su producción, en reconocimiento de los modelos campesinos tradicionales y artesanales (negrita y cursiva del original).

e) Documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) vinculados a la pesca y la acuicultura.

La Tabla número 4 reúne los documentos Conpes aprobados desde 1980 en adelante. No se registran documentos después de 1997.

Número	Título	Año	Fuente
2959	Política para el desarrollo de la pesca y la acuicultura	1997	22
2786	Política de competitividad agropecuaria, pesquera y forestal.	1995	23
2409	Desarrollo de puertos pesqueros para el Pacífico: proyecto pesquero de Tumaco.	1989	24
2383	Desarrollo de puertos pesqueros para el Pacífico: Puerto pesquero de Buenaventura.	1988	25
2119	Lineamientos de política para el fomento pesquero.	1984	No disponible
1821	Bases para el plan indicativo de la pesca industrial.	1981	No disponible

Tabla número 4: Documentos Conpes sobre pesca y acuicultura aprobados desde 1980 en adelante.

IV. IMPACTO FISCAL

a) Extracto del presupuesto 2013.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBIG PROJ	ORD SPRY	CONCEPTO	APORTE NACIONAL (en millones)	RECURSOS PROPIOS (en millones)	TOTAL (en millones)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL							
520	1104	-	-	PESCA Y ACUICULTURA	2 200	0	2 200
520	1104	1		IMPLEMENTACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL	2 200	0	2 200
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA, (AUNAP)							
TOTAL PRESUPUESTO					17 913,5	2 022,7	19 936,2
A. FUNCIONAMIENTO					8 566,5	0	8 566,5
C. INVERSIÓN					9 347	2 022,7	11 369,7

Tabla número 5: Presupuesto 2013. Extracto de fondos orientados a la pesca y acuicultura, redondeados a la centena de mil. Fuente: Congreso de la República, en sitio web del Ministerio de Hacienda²⁶.

No se registran fondos en pesca o acuicultura en otras instituciones.

b) Extracto presupuesto 2014 (proyecto)

CTA PROG	SUBC SUBP	OBIG PROJ	ORD SPRY	CONCEPTO	APORTE NACIONAL (en millones)	RECURSOS PROPIOS (en millones)	TOTAL (en millones)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL							
520				ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	308 809,5	0	308 809,5
520	1104	-	-	PESCA Y ACUICULTURA	2 064,1	0	2 064,1
620				SUBSIDIOS	45 968	0	45 968
620	1104	-	-	PESCA Y ACUICULTURA	3 903	0	3 903
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA, (AUNAP)							
TOTAL PRESUPUESTO					15 947,9	3 221,1	19 169
A. FUNCIONAMIENTO					9 673,9	514,1	10 188
C. INVERSIÓN					6 274	2 707	8 981

Tabla número 6: Presupuesto 2014 (proyecto). Extracto de fondos orientados a la pesca y acuicultura, redondeados a la centena de mil. Fuente: Congreso de la República, en sitio web del Ministerio de Hacienda²⁷.

No se registran fondos en pesca o acuicultura en otras instituciones.

Se observa un descenso en el monto asignado directamente al MADR de 2.200 a 2.064 millones de pesos. Mientras que en su entidad adscrita, la Aunap, los fondos asignados bajan de 17.914 millones a 15.948, y los fondos propios previstos aumentan de 2.023 millones a 3.221. El incremento, sin embargo, no alcanza a soslayar la baja del presupuesto general, de 19.936 a 19.169 millones. Si

en 2013 se gastaba más en inversión que en funcionamiento (11 mil vs. 8 mil millones), para 2014 la situación se invertirá, gastando más en funcionamiento (10 mil millones) que en inversión (8 mil millones).

c) Regalías.

La distribución de los fondos de regalías aprobados según sector, muestra la nula presencia de la pesca y la acuicultura en el Sistema General de Regalías. El gráfico número 2 muestra la distribución de estos fondos para proyectos ejecutados y en ejecución en 2012 y 2013, como también los fondos programados para 2014 y 2015. Se observa que no existe un ítem de pesca y acuicultura.



Gráfico número 2: Total de montos aprobados en regalías por sector 2012 – 2015.

Fuente: Sistema General de Regalías²⁸.

En tanto, en el monitoreo de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), se advierte que de los 3421 proyectos aprobados en 2012 y 2013, solo 5 se vinculan con pesca y acuicultura:

- Uno en Antioquia, en el sector de Ciencia y Tecnología, aprobado en 2012, que recibió 4.924 millones de pesos.

- Uno en La Guajira, en el sector de Agricultura, aprobado en 2012 con un monto de 8.401 millones de pesos.

²² <https://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/2959.pdf>

²³ <https://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/2786.pdf>

²⁴ <https://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/2409.pdf>

²⁵ <https://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/2383.pdf>

²⁶ <http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldeLANACION/ProyectoPGN/2013/Anexo%20de%20Gastos.pdf>

²⁷ <http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldeLANACION/ProyectoPGN/2014/2%20PROYECTO%20PGN%202014.pdf>

²⁸ <https://www.sgr.gov.co/SMSCE/MonitoreoSGR/AvancesOCAD/Recursosporsector.aspx>

- Uno en el Cesar, en el sector de Comercio, Industria y Turismo, aprobado en 2013 con un monto de 400 millones de pesos²⁹.

- Uno en Magdalena, en el sector de Ciencia y Tecnología, aprobado en 2013 con un monto de 1.686 millones de pesos.

- Uno en La Guajira, Bolívar y Sucre, en el sector de Ciencia y Tecnología, aprobado en 2012 con un monto combinado de 8.638 millones de pesos.

Esto da cuenta de la necesidad de consolidar un ítem de pesca y acuicultura en las destinaciones de las regalías.

De los honorables Congresistas.



ALEXANDRA MORENO PIRAQUIVE
SENADORA DE LA REPÚBLICA

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 7 del mes de mayo del año 2014 se radicó en este despacho el Proyecto de ley número 198, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por los honorables Senadores *Alexandra Moreno P., Carlos Baena, Édinson Delgado, Hernán Andrade S., Astrid Sánchez M. y honorables Representantes Gloria Stella Díaz Q, Jairo Hinestrosa, Heriberto Arrechea, Bernardo Flores* y otros.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014

Señor Presidente:

Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 198 de 2014 Senado, *por la cual se expide la ley general de Pesca y Agricultura y se dictan otras disposiciones*. Me permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General, por los honorables Senadores *Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Baena, Édinson Delgado, Hernán Andrade Serrano, Astrid Sánchez* y honorables Representantes *Gloria Ste-*

lla Díaz, Jairo Hinestrosa, Heriberto Arrechea, Bernardo Flores y otros. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley, es competencia de la Comisión Quinta Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Quinta Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cumplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

* * *

PROYECTO DE LEY NÚMERO 199 DE 2014
SENADO

por la cual se rinde homenaje a un ciudadano meritorio asignándole su nombre a una obra de interés público.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El Congreso de la República de Colombia honra la memoria y trayectoria pública del ilustre ciudadano y ex Ministro Andrés Uriel Gallego, y exalta su vida como modelo de consagración al servicio de nuestro país.

Artículo 2°. El túnel que pasa por debajo del Alto de la Línea en la cordillera central ubicado entre los departamentos de Tolima y Quindío, a 38 kilómetros de la ciudad de Ibagué en su entrada oriental y a 19 kilómetros de la ciudad de Armenia en su entrada occidental, se denominará "Túnel Andrés Uriel Gallego".

Artículo 3°. Por la Secretaría del Senado de la República remítase en nota de estilo, copia de la presente ley a los familiares de este benemérito compatriota (q.e.p.d).

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación.

Cordialmente,



JUAN CARLOS VÉLEZ URIBE
Senador de la República.

²⁹ El de Antioquia tiene el N° BPIN 2012000100159, el de La Guajira el N° 2013000020060, el del Cesar el N° 2013002200073, el de Magdalena el N° 2013000100026 y el de La Guajira, Bolívar y Sucre 2012000100189. Fuente: Sistema General de Regalías, tabla "Proyectos OCAD 02082013" <https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=qZtttdq51r1Y%3d&tabid=235>.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Faltarían palabras y distinciones para exaltar la obra y memoria del Ingeniero y Ex ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego Henao, pues pocas son las personas que pasan por el mundo y especialmente por este país dejando a su paso un legado que permita su buena remembranza, más aun, cuando su reconocimiento se debe a un trabajo entregado al servicio del desarrollo de todos los colombianos, pero de manera especial por la gran cantidad de significativas obras para resaltar en el ejercicio de sus funciones como Ministro de Transporte del Gobierno del Ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que sin duda alguna contribuyen de manera directa en la modernización y el progreso que nuestro país necesita.

El ingeniero civil Andrés Uriel Gallego falleció el 17 de abril del presente año. Era egresado de la Universidad Nacional de Colombia, siendo profesor de la misma durante más de 20 años, fue concejal de su municipio Marinilla (Antioquia) en múltiples oportunidades, nombrado Secretario Departamental de Obras Públicas en el año 1995 por el Ex presidente Álvaro Uribe Vélez quien para la época fue elegido como gobernador del departamento Antioqueño, hasta diciembre de 1997. En el año 2002, año de la elección como presidente de los colombianos, el doctor Álvaro Uribe nuevamente lo vincula para hacer parte del gabinete ocupando el cargo de Ministro de Transporte y Obras Públicas, en el cual se mantuvo durante los ocho años de mandato del Presidente Uribe.

Hasta el año 2002, como consecuencia de la desbordada actividad terrorista de los grupos violentos al margen de la ley, la cual tenía directa injerencia en los retrasos de la modernización en materia de infraestructura Nacional, en el entendido que, cuando se intentaba realizar una obra de alto impacto, primero se debía consultar al comandante de turno de la columna que tuviera bajo su mando el control de la zona, para, con posterioridad a su “autorización”, proceder a pagar una cuantiosa suma de dinero como cuota que permitiera realizar la obra proyectada.

Con la llegada del Gobierno Uribe, y como parte integral del mismo el ex Ministro Andrés Uriel Gallego, se logra a través de la política de seguridad democrática, combatir hasta su virtual extinción, los absurdos y arbitrarias imposiciones guerrilleras y se procede a la implementación de una política paralela de desarrollo y modernización de la infraestructura, con el objeto de abrir las puertas y las convicciones de los colombianos, motivándolos hacia un pensamiento de progreso que condujera a salir de la sumisión de un Estado conformista para convertirlos en promotores del desarrollo. Me refiero de manera específica a nuestros campesinos que son los principales beneficiarios con las grandes obras de infraestructura proyectadas y ejecutadas por el Ministro Andrés Uriel, en la medida que sus posibilidades de abrir mercados internos se maximizan y en las posibilida-

dades de exportación de sus productos se convierten en realidad, transformándose en generadores de empleos y riqueza.

Es aquí donde la política de seguridad democrática abre el camino hacia el verdadero progreso y es aquí donde las enormes capacidades profesionales y de ejecución del Ministro Andrés Uriel Gallego juegan un papel definitivo, que de manera concomitante a la recuperación del país en materia de seguridad, permite la posibilidad de dar inicio a las grandes obras de infraestructura, entre las que me permito destacar las siguientes: concibió y contrató la Ruta del Sol; concibió y contrató tramos de dobles calzadas de Montería, Sincelejo, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta; contrató doble calzada de Bogotá a Sogamoso; contrató los diferentes tramos de doble calzada entre Bogotá y Buenaventura; aportó los recursos para la doble calzada del sur de Bogotá que comunica con el túnel del Llano; puso en marcha la concesión al Llano y contrató doble calzada en 38 kilómetros; avanzó en dobles calzadas y variantes en la Sabana de Bogotá; concluyó Túnel de Occidente; destrabó Autopistas del Café y dio impulso definitivo; contrató la concesión Ipiales – Pasto, Aeropuerto con Túnel de Daza; contrató las vías de Popayán al Huila y la Circunvalar del Macizo; contrató la vía Pasto – Mocoa por la variante de San Francisco; contrató la vía Colombia Huila a la Uribe, Meta; contrató y ejecutó vía Puerto López – Puerto Gaitán; contrató la carretera Granada – San José del Guaviare; contrató viaductos de Sogamoso a Yopal; contrató vía del Carare de Boyacá al Magdalena Santandereano; contrató la vía Central del Norte de Pamplona por Santander a Boyacá; contrató primer trayecto de doble calzada Bucaramanga Alto de Berlín en carretera a Cúcuta; contrató concesión Metropolitana de Cúcuta con doble calzada a Pamplona; contrató con el Ejército la vía de la Soberanía, Arauca, Norte de Santander; recuperó líneas férreas de Buenaventura Cartago y Santa Marta La Dorada; contrató doble calzada ferroviaria de La Loma a Santa Marta; promovió ferrovía del Carare a la Sabana Cundinamarca Boyacá; concibió y contrató con Gobierno departamental de Antioquia para ferrocarril Puerto Berrío – Medellín; exigió el traslado de los puertos carboneros de Santa Marta y el sistema de cargue directo; modificó concesiones portuarios, introduciendo estímulos tributarios; construyó los espolones del Puerto de Barranquilla; contrató estudios para obras del Canal del Dique; entre muchas otras obras en distintas regiones del país.

Pero aquella obra de alto impacto que nos permite hacer el reconocimiento a través de esta iniciativa, es que concibió y construyó el Túnel de Prueba y contrató el Túnel definitivo de La Línea (Segundo Centenario), que comunica a los departamentos de Quindío y Tolima y que busca la reducción significativa en el tiempo que tarda el desplazamiento por vía terrestre de aquellos vehículos que se dirigen hacia la capital de la Repú-

blica, procedentes del sur del país especialmente desde Nariño, Cali y el puerto de Buenaventura.

Este iniciativa para rendir honores, tiene como objeto exaltar la memoria y buen nombre de Andrés Uriel Gallego Henao, como símbolo representativo de la ingeniería, del desarrollo y de la infraestructura colombiana y por lo tanto denomina el túnel que pasa por debajo del Alto de la Línea en la cordillera central ubicado entre los departamentos de Tolima y Quindío, con su nombre.

Es evidente que el Ex ministro Andrés Uriel Gallego, reúne las cualidades requeridas para merecer esta ley de honores, no solo por tratarse de un personaje público que ha prestado sus servicios a la patria contribuyendo con su desarrollo, sino por inmensa vocación de servicio para con los colombianos.

MARCO CONSTITUCIONAL

El numeral 15 del artículo 150 de nuestra Constitución Política, faculta al Congreso de la República para exaltar a aquellos ciudadanos que a través de sus acciones u opiniones han contribuido en el desarrollo y progreso de la sociedad colombiana.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y buscando rendir un merecido homenaje póstumo al Ex ministro e ingeniero Andrés Uriel Gallego (q.e. p. d), pongo a consideración del Congreso de la República, el presente Proyecto de ley.

Cordialmente,



JUAN CARLOS VÉLEZ URIBE
Senador de la República

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014

Señor Presidente:

Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de ley número 199 de 2014 Senado, *por la*

cual se rinde homenaje a un ciudadano meritorio asignándole su nombre a una Obra de interés público. Me permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General, por el honorable Senador *Juan Carlos Vélez Uribe*. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley, es competencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 7 de mayo de 2014

De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Segunda Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el fin de que sea publicado en la *Gaceta del Congreso*.

Cumplase.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

CONTENIDO

Gaceta número 193 - Jueves, 8 de mayo de 2014

SENADO DE LA REPÚBLICA Págs.

PROYECTOS DE LEY

Proyecto de ley número 198 de 2014 Senado, por la cual se expide la Ley General de Pesca y Acuicultura y se dictan otras disposiciones.....	1
Proyecto de ley número 199 de 2014 Senado, por la cual se rinde homenaje a un ciudadano meritorio asignándole su nombre a una obra de interés público.....	30